Los empresarios en los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid

MATILDE LUNA

RENÉ MILLÁN

RICARDO TIRADO

INTRODUCCIÓN

Desde el principio de la década de los setenta se ha dado un proceso de politización de los empresarios que es efecto y causa de muchas transformaciones recientes del régimen mexicano.

Ese proceso experimentó un fuerte impulso a mediados de la década de los setenta, a raíz del conflicto entre los empresarios y el gobierno reformista de Echeverría, y luego un acentuado reflujó con la “vuelta de la confianza” que suscitaron la política complaciente con los empresarios y el auge económico de los primeros cinco años del gobierno de López Portillo.

La crisis desatada desde mediados de 1981 comenzó a deteriorar nuevamente las relaciones entre los empresarios y el gobierno, pero sin duda alguna la nacionalización de la banca decretada el 1 de septiembre de 1982 fue el acto desencadenante de una nueva coyuntura rica en movimientos, reacomodos y cambios que darán nuevos impulsos al proceso de politización empresarial.

En este trabajo nos proponemos describir y analizar los elementos que nos parecen más importantes de la nueva coyuntura abierta ese 1 de septiembre: abrupta ruptura de la alianza entre los empresarios y el gobierno, modificación del pacto social, activación de la lucha social y en ese proceso: nuevas condiciones de la politización empresarial.

El trabajo se divide en cuatro partes. La primera, de carácter histórico analítico, trata de extraer del pasado reciente las tendencias de la acción empresarial, que nos permiten inteligir las circunstancias globales que prevalecían en el momento del acto propiciador.

El segundo apartado abre precisamente con la nacionalización de la banca, la interpretación de su significado y de sus consecuencias: reafir-

mación del gobierno, del Estado y de la desgastada hegemonía burocrática; quebrantamiento de la alianza; descabezamiento del núcleo hegemónico en el interior de la burguesía; producción de un espacio económico político en disputa; fractura de la unidad burocrática; reaparición de las fracciones históricas de la burguesía, y señal de arranque de forcejeos y ensayos de los empresarios y el gobierno, tratando cada uno de conformar y sentar los términos de una nueva alianza que no acaba de cuajar todavía.

Sigue luego una tercera parte dedicada por entero al "realismo económico", que caracteriza a la política económica del nuevo gobierno y que ha sido uno de los puntos fundamentales de amplio acuerdo entre los principales actores en juego.*

El cuarto y último apartado se ocupa de la nueva voluntad política empresarial, que traducida en una decisión de participar más estable y enfáticamente en la determinación de las políticas públicas de todo orden, se manifiesta principalmente a través de tres vías de acción: por la vía administrativa, en demanda de un sistema corporativo, privatista y bipartita; por la vía político partidista, a través —muy ruidosamente— del PAN, pero también del PRI, y por la vía cívica, tratando de reforzar sus posiciones en el seno de la sociedad civil, mediante el despliegue de una ofensiva político ideológica en los más diversos espacios sociales y la alianza y acción concertada con la Iglesia, procurando cada uno fortalecer sus propias posiciones políticas.

L ANTECEDENTES

Los desacuerdos entre los empresarios y el gobierno a mediados de la década de los setenta derivaron, en el marco de una recesión económica mundial, en un fuerte conflicto que en la dialéctica de su desarrollo desató fuerzas, políticas y proyectos enfrentados que en 1976 desembocaron finalmente en una crisis económica y política de graves consecuencias.

El conflicto y la crisis produjeron una rica gama de nuevos fenómenos de los que aquí intentamos dar cuenta de manera resumida.

En el principio fueron el lento pero continuado agotamiento del modelo económico seguido durante décadas; el gran poder económico y la influencia social e ideológica desarrollados por los empresarios en los sesenta; la tendencia creciente a identificar el interés público con el privado y el desgaste de la hegemonía de la burocracia política.

El hermetismo del régimen hizo explosión con un gran movimiento estudiantil popular, que fue brutalmente reprimido y condujo a pensar en una irreversible involución autoritaria, que ponía fin definitivo al ciclo histórico de la Revolución mexicana.

* El lector enterado puede, sin perjuicio, omitir esta parte.

Pero vino luego el gobierno de una facción de la burocracia política encabezada por el presidente Echeverría, que promueve un proyecto de reformas legitimadoras y modernizadoras encaminado a restablecer la vigencia del viejo pacto social y en particular la hegemonía burocrática, por la vía de fortalecer al Estado en todos los órdenes, retomando y renovando las tradiciones reformistas, nacionalistas y populistas heredadas de la Revolución mexicana.

El reformismo despertó una reacción empresarial que en la medida en que el conflicto se agudizó, pasó de una primera fase de sorpresa y oposición de las cúpulas empresariales e inquietud y temores individuales de los empresarios, que fueron derivando hacia sus organizaciones, a otra segunda en la que la acción opositora de los grupos de presión se subordina a una auténtica acción de clase canalizada a través de las mismas agrupaciones empresariales. Vino luego una tercera fase en la que la reacción desbordó a los empresarios e involucró a otros sectores sociales, adquiriendo la dinámica de un movimiento social de derecha que logró finalmente derrotar al reformismo.

En el centro del conflicto está la lucha ideológico política que enfrenta un discurso radicalizado de la burocracia política y del presidente en particular, a otro contradiscurso de la reacción que advierte en contra del estatismo oficial. La exacerbación de la lucha hace que los opuestos interlocutores se interpeleen recíprocamente a través de etiquetas totalizadoras de fuertes connotaciones políticas como “los empresarios reaccionarios que no quieren ceder nada” y “los burócratas comunistas que todo quieren controlar”. El impacto de la disputa ideológico política es tan grande que incide en todo el ámbito social.

El movimiento social de la derecha se sustentó en un conjunto heterogéneo, disperso y difuso de grupos, sectores, organizaciones y fuerzas entre las cuales se distinguen, además de los empresarios, los sectores medios urbanos consumistas, la Iglesia y el partido tradicional de la derecha, apoyados de manera más o menos transparente por los medios masivos de comunicación social. Dado lo endeble de su organización, llama la atención sobre todo la eficacia de su fuerza. En efecto, aunque el movimiento no logró nunca articularse en una organización, ya no digamos única, sino siquiera significativa, ni realizó tampoco grandes y visibles movilizaciones, ni tuvo siquiera un liderazgo ampliamente reconocido, su impacto social fue muy grande.

Esto fue posible gracias al descrédito tan grande a que sometió al gobierno y la burocracia política, mediante una táctica inédita en México: la difusión, apoyada en los medios, de rumores que advertían sobre toda clase de peligros, de chismes y chistes que hacían escarnio de los políticos y en particular de la figura presidencial.

La activación empresarial va también, al pasar de una acción de gru-

pos de presión a una acción de clase, a destapar y reactivar a las viejas fracciones históricas de la burguesía que entumidas en la placidez de la *pax* del diazordazato, habían venido languideciendo y fusionándose en torno a un núcleo hegemónico, integrado por los más poderosos grupos financieros de las dos fracciones. Vuelve entonces a hacerse visible la fracción excéntrica o norteña encabezada por los regiomontanos, que tiene una base plurisectorial y nutre su fuerza en la provincia, sobre todo en los estados del norte fronterizo y en Jalisco, Guanajuato, Puebla y Yucatán y que se caracteriza por su duro antiestatismo. Pero también volvió a aparecer la fracción central o del valle de México que tiene un liderazgo más difuso, una base más industrialista, fuerza en la región de su sede y se caracteriza por un comportamiento político más negociador y conciliador con el gobierno.

Estas fracciones burguesas, como lo hicieron en el pasado en otras coyunturas de conflicto, van a contender entre sí por el liderazgo de la clase y la línea política a seguir. Sorprende que en el momento más álgido del conflicto y de la crisis, el trimestre que va del informe presidencial en que se anuncia la devaluación del peso, al 1 de diciembre de 1976, en que asume la presidencia el nuevo gobierno, la dura fracción norteña logra la hegemonía de la clase y la conducción del movimiento derechista.

Otro aspecto digno de considerarse y que muestra la fuerza y la eficacia del movimiento de la derecha es que con sus presiones consigue primero ahondar las fisuras interburocráticas y luego —comprimiendo a la burocracia contra la barrera inexorable del relevo presidencial— fractura su unidad y hace que se contraponga a la fracción reformista y populista encabezada por Echeverría, otra facción contemporizadora de la reacción que se aglutina en torno al candidato López Portillo.

En el momento de la sucesión presidencial, derrotado el reformismo populista y con el nuevo gobierno pidiendo tregua, aparece con claridad meridiana la burguesía, hegemonizada por la fracción norteña, unificada como nunca antes en una nueva organización (el CCE), con una nueva voluntad política y un incipiente proyecto de clase, que en franca disputa de la hegemonía, reclama el otorgamiento de las garantías políticas necesarias, para que no se repita la experiencia de un gobierno con veleidades reformistas y populistas y el establecimiento de garantías de que participará directamente en la elaboración de las políticas públicas.

Pero la unidad alcanzada y la hegemonía de los norteños durará bien poco. Apenas el nuevo gobierno comienza a hacer concesiones y se inicia el auge petrolero, vuelve la confianza y con ella la acción de la burguesía comienza a experimentar un reflujo que destruye la unidad lograda, reblandece la voluntad política alcanzada y el proyecto de clase generado, y vuelve a privilegiar la acción de las organizaciones empresariales, como grupos de presión gremialistas y economicistas.

Hacia 1979 los empresarios viven una euforia de crecimiento y derroche fincado en el petróleo y la confianza casi total que les inspira el gobierno de López Portillo. Con ello, el reflujó y la despolitización continúan. Las fracciones históricas de la clase tienden nuevamente a eclipsarse y los hegemónicos, en cada una de ellas, tienden otra vez a converger en un solo núcleo articulado por los más poderosos grupos financieros. Su influencia sobre las decisiones de política económica y financiera se incrementa. Son aún capaces de enriquecer a su proyecto de clase con una dimensión económica nueva: pretenden nada menos que redefinir el modelo de acumulación con base en una concepción "realista" neoliberal, que encomia la explotación de nuestras "ventajas comparativas": abundante mano de obra barata, cercanía geográfica al gran mercado de la América del Norte y abundantes materias primas, sobre todo petróleo y gas. Pero no logran ya la unidad de la clase: Canancintra, expresión de los medianos y pequeños industriales se opone al ingreso al GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio).

La caída de los precios del petróleo en el mercado internacional a mediados de 1981, el exagerado endeudamiento externo, el círculo vicioso del alza de las tasas de interés, devaluación, inflación, dolarización del sistema financiero y la fuga de capitales, precipitaron una crisis económica de dimensiones amplísimas, que dejaron fuera de control al patrón monetario nacional.

Sobreviene entonces la respuesta gubernamental: expropiación de la banca privada.

II. NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, REACCIÓN EMPRESARIAL Y BASES PARA LA REDEFINICIÓN DE LA ALIANZA

1. *Nacionalización bancaria y reacción empresarial*

La gravedad de la crisis económica que se presenta después de algunos años de "abundancia", obligó al gobierno a tomar medidas graves para controlarla. Con la nacionalización de la banca y el control de cambios, decretados en el último informe gubernamental de López Portillo, se intenta reconstruir el patrón monetario nacional, recuperar la soberanía estatal en materia de política económica y frenar presiones incontrolables. Después de casi un sexenio de amplias canonjías y una creciente penetración y peso en la configuración de las políticas gubernamentales, los empresarios se ven golpeados en un punto medular para su acción y articulación de clase.

Por ello la nacionalización tiene elementos políticos que rebasan, con **mucho, la concepción** de la misma como ingrediente técnico de control de la crisis. La nacionalización bancaria, en cuanto *acto*, se presentó como apertura de una coyuntura, como un hecho desencadenante.

En su dimensión política, la nacionalización vino a modificar en forma más o menos grave la tendencia "normal" de estructuración de los vínculos entre los empresarios y el Estado. Dicha tendencia había vuelto a imponerse de manera acelerada desde el inicio del período de López Portillo, y se basaba en un complejo sistema de intereses ordenados en torno a una creciente influencia empresarial en la determinación del contenido y significado de la política económica impulsada en lo esencial por el capital financiero, éste se había convertido en el polo más dinámico y fuerte del sector privado. Al constituirse en el núcleo líder de la clase fue estableciendo "silenciosamente", mecanismos de negociación que apuntaban a una mayor penetración directa en los aparatos estatales encargados de dictar los lineamientos económicos.

De esta forma, la nacionalización en tanto que elemento fundamental de la coyuntura acarrió tres resultados negativos; quebrantamiento de los términos de la alianza entre Estado y empresarios; descabezamiento, de golpe, del núcleo dirigente del sector empresarial y, por ello, la presencia de un espacio de poder en dos sentidos, a nivel nacional y en el interior de la propia clase empresarial, cuya capitalización se disputan los distintos sectores sociales y las fracciones o núcleos privados.

En otro plano, como efecto inmediato de la nacionalización, el Estado se fortaleció y se presentó como aglutinador de un conjunto de fuerzas; en tanto que los empresarios se ven golpeados duramente. Por ello, su respuesta no fue, de momento, lo suficientemente fuerte para cristalizar en un movimiento de peso. La primera reacción de la gran burguesía se dio a través de sus organizaciones en forma unificada, condenando en forma tajante el acto expropiatorio: se le concibe como una "señal clara de la entrada del país al socialismo".

Sin embargo, la unidad de clase para contrarrestar la medida no se sostiene bajo una estructura sólida. Rápidamente comienzan a expresarse un conjunto de empresas y organizaciones patronales, destacadamente la Concamin y la Canacintra, organizaciones que tradicionalmente expresan a la fracción conciliadora, aceptando el hecho consumado de la nacionalización. En el mismo sentido se pronuncian algunos núcleos financieros internacionales, lo que resta poder y legitimidad a la protesta empresarial nacional.

No obstante esta aceptación de la nacionalización por algunos sectores empresariales, se está en presencia de una crisis de legitimidad del gobierno ante todos los empresarios, pues sin duda, aun los sectores y la fracción que aceptó el hecho consumado habrían preferido una medida que, res-

tucturando la actividad financiera y afectando el dominio que sobre ella tenían los poderosos grupos privados, fuera menos radical.

En síntesis, puede afirmarse que la contraofensiva de la burguesía no prosperó por las siguientes razones: los empresarios se encontraban desunidos política e ideológicamente; divididos según sus intereses de gremio y capas y, actuando por ello, como grupos de presión que tutelan intereses específicos; el golpe fue sorpresivo y no dio tiempo, dadas las características organizativas de la clase, para instrumentar una movilización conjunta para la defensa de sus intereses globales.

A estos factores fundamentales, se agrega otro de importancia singular: el rápido y amplio apoyo popular suscitado por la nacionalización, cuya expresión más acabada fue la concentración de masas organizada por el PRI en el Zócalo. El impacto del apoyo popular fue tal que los empresarios llegaron a declarar que tenían que el orden jurídico fuera roto; además el apoyo popular coadyuvó a frenar el paro nacional patronal planteado para el 8 de septiembre; “nos echaron al pueblo encima”, expresarían los empresarios.

No obstante lo anterior, sí logran desarrollar cierto nivel de movilización en la base empresarial, fundamentalmente la fracción norteña: los centros patronales, cámaras de comercio y demás asociaciones empresariales de Sinaloa, Chihuahua, Baja California Norte, Sonora, Nuevo León, Jalisco y Puebla, arman una campaña de movilización contra la medida. En Monterrey, el día seis, mil personas manifiestan en las calles su protesta; dos días después lo hacen 200 mil, pero en apoyo de López Portillo.

En general, pasados los primeros días posteriores a la nacionalización, se hacen presentes dos líneas de comportamiento empresarial. De una parte, los industriales afiliados a la Concamin y a la Canancintra, sin desistirse explícitamente de la solidaridad que habían manifestado desde el primer momento a los banqueros, comienzan a matizar sus pronunciamientos y a allanarse a la medida tomada; por otra, en las ciudades de los estados referidos continúa una activación empresarial, alentada por el Consejo Coordinador Empresarial y la Concanaco. Este empuje de la línea dura alcanza uno de sus momentos más altos, en la coyuntura, al instrumentar una serie de reuniones empresariales con grupos de estudiantes, profesionistas, amas de casa y otros sectores medios, con el sugerente nombre de “México en la libertad”.

Estas reuniones se celebraron en las ciudades de Monterrey, Torreón, León, Mérida y Culiacán, y en todas se insistió en presentar a la nacionalización como una medida de carácter socialista y totalitario; se protestó contra el autoritarismo estatal, por “la injusticia de que un solo hombre tome decisiones tan importantes como las del 1 de septiembre”, y se convocó a la sociedad civil a participar activamente en política, con el fin de terminar con los graves y peligrosos defectos de nuestro sistema político.

Las reuniones de “México en la libertad” se continuaron, como una

cruzada empresarial, durante los meses de octubre y noviembre, y se tenía calculado concluir las con un gigantesco evento a celebrarse en la ciudad de México. El acto final estaba pensado como factor de aglutinamiento social, en forma masiva y como vector de descontentos de los sectores medios ante la crisis, a sólo unos días del relevo presidencial. La importancia política del mismo era obvia. Sin embargo, el 16 de noviembre, Manuel J. Clouthier, presidente del CCE, informó que él y algunos representantes del sector privado se habían reunido con Miguel de la Madrid, y le habían reiterado su decisión de colaborar para superar la crisis, por lo que se había celebrado un acuerdo con el presidente electo "parecido al de la Alianza para la Producción". Con este acuerdo los empresarios se comprometían a coordinar esfuerzos con el sector oficial para solventar la situación económica. Por otra parte, se hizo público que el acto del 26 se suspendía. Se había llegado, pues, a un arreglo con Miguel de la Madrid. Pero, ¿cuáles eran sus términos, sus alcances y su importancia en la coyuntura? La respuesta de estas interrogantes se fue gestando al calor de pugnas y conflictos, concertaciones y disputas.

2. *Confirmación de la nacionalización y bases para la redefinición de la alianza*

En medio de un gran distanciamiento entre el equipo gobernante saliente y los empresarios, se advierten algunos signos insuficientes, pero sintomáticos, de una posible alianza del sector patronal con Miguel de la Madrid. En esas condiciones se efectúa el relevo. Es sin lugar a dudas, un apoyo extraordinariamente condicionado y momentáneo. Por ello, y dadas las características de nuestro régimen político, la coyuntura antes definida en términos negativos se transforma en positiva; y queda expresada desde la óptica gubernamental en la siguiente problemática: ¿cómo y bajo qué términos concertar una alianza con los empresarios, que permita articular intereses y formas de participación reguladas bajo un ejercicio de gobierno en equilibrio?, ¿qué núcleo empresarial puede ser la punta de la alianza en el marco de una reordenación económica, y cuáles los mecanismos de negociación entre empresarios y Estado? Estas cuestiones son el punto central, medular, de la coyuntura que se abre con la nacionalización y se redefine con el relevo presidencial.

Al mismo tiempo, todas estas cuestiones están al parecer en vías de resolverse; la respuesta será seguramente producto de un proceso de confrontación de proyectos, políticas y fuerzas. No existe hoy, consideramos, ninguna respuesta completamente cristalizada. La necesidad de conformar una nueva alianza no es todavía una concreción; un hecho patente.

Hay en esos momentos elementos que de alguna forma señalan la posible configuración de dicha alianza. Para entenderlos cabalmente es pre-

ciso considerar la condición en la que arriban los actores y clases sociales al relevo presidencial. En el marco de un fortalecimiento estatal merced a la nacionalización, la burocracia política se enfrenta a un desprestigio ante la sociedad; difundida en gran medida la teoría de la crisis como resultante de la corrupción existente dentro del gobierno y la ineficacia en la administración de los asuntos públicos, la condición "moral" de la burocracia llega, ante los ojos de amplios sectores de la ciudadanía, a niveles paupérrimos. Desde luego que este desprestigio se manifiesta sobre todo en el sector empresarial; de hecho ante esta clase social el gobierno enfrenta una grave crisis de legitimidad, elemento fundamental de la coyuntura.

Pero la coyuntura es aún más grave porque además del desprestigio generalizado y la crisis de legitimidad ante los empresarios, la burocracia realiza el cambio de poderes en condiciones de debilidad, pues en sus filas las facciones tienden a dividirse.

Por una parte el natural distanciamiento entre los entrantes y los salientes, típico de todo relevo sexenal, conlleva en el discurso de la renovación moral, una carga más o menos explícita de crítica a la corrupción, al nepotismo y a la improvisación, en las postrimerías de la gestión que termina. Por otra parte, el nuevo equipo gobernante proviene, de manera muy acentuada, de fuera de las entrañas de la burocracia política más ligada al partido; no surge de éste. El partido muestra signos de agotamiento y se torna un canal de ascenso político inviable. La forma de reclutamiento de los nuevos cuadros es la culminación más o menos acabada de un proceso, que claro ya con López Portillo, tiende a una modernización del personal político por fuera de los conductos tradicionales. La academia se contrapone al partido.

Pero lo que es más importante, la nacionalización afianza la distancia entre la facción saliente y la entrante. Es de suponer que ésta, asimismo, modifica en algo el plan de gobierno y las alianzas concertadas durante la campaña. La renuencia del régimen actual por aceptar plenamente la nacionalización se expresó en su nivel más simple, gráficamente, en el tibio aplauso de Miguel de la Madrid ante el anuncio de la nacionalización, hecho en el último informe de gobierno del presidente anterior. De otra parte, conforme se apuntala, el nuevo equipo tiende a deslindarse del "contenido" lopezportillista como una forma de abonar terreno para la negociación.

Según ya señalamos, los empresarios se ven incapacitados para dar una respuesta unificada a la nacionalización. Frente a ella, se ponen de manifiesto las pugnas intestinas de la clase y las fracciones; entre la pequeña y mediana burguesía con los organismos patronales cúpula, controlados por los grupos más concentrados. Por ello, éstos no cuentan con el suficiente consenso para comprometer a la clase en su conjunto. La división, pues, dificulta la respuesta desde la perspectiva del capital más concen-

trado. Pero sobre todo revela una disgregación de políticas en el momento de enfrentar la coyuntura.

De esta forma, los empresarios arriban a la sucesión presidencial debilitados económica y políticamente; las fracciones políticas tienden a polarizarse y aflora una lucha, callada pero efectiva, por capitalizar el liderazgo de clase, vacante por la nacionalización.

En estas condiciones, el sector privado ve canceladas en lo inmediato sus posibilidades de presión y, sin abandonar del todo una esperanza de que la banca sea devuelta, se repliega para instrumentar otra línea política: presionar, en una temporada más larga, por definir la orientación de la banca, la política económica y conseguir la devolución de las empresas nacionalizadas vía activos bancarios. Y en el terreno propiamente político: fortalecer la unidad de clase y elaborar una estrategia de mayor alcance tendiente a delimitar y frenar la intervención del Estado en la economía.

La toma de posesión del presidente De la Madrid inaugura una segunda parte de la coyuntura abierta por la nacionalización, en la que el nuevo equipo al frente del gobierno desplegará una gran actividad, cuyo núcleo central es la confirmación de la nacionalización y la propuesta de bases para redefinir la alianza entre el gobierno y los empresarios, elemento fundamental del pacto social que quebrantó la expropiación bancaria, y superar la nueva "crisis de confianza" de su interlocutor privilegiado: la clase empresarial.

La propuesta gubernamental intentará dar respuesta a las siguientes cuestiones candentes suscitadas por los empresarios a raíz de la nacionalización, y coreadas por toda la derecha e incluso por otros sectores de la opinión pública: ¿cuál será en adelante el marco de las relaciones entre el gobierno y los empresarios?, ¿cuáles son los límites de la economía mixta y la intervención del Estado?, ¿se optará por el populismo reformista y estatista o por el liberalismo y la ortodoxia económica?, ¿podrán ser nacionalizados otros sectores de la economía?, ¿podrá nuevamente un presidente tomar él solo decisiones tan importantes?, ¿cuál será el destino de la banca: se reprivatizará devolviéndola nuevamente a sus antiguos dueños o se confirma la nacionalización?, ¿quiénes y en qué condiciones serán ahora los usuarios del crédito?, ¿quién ocupará el espacio político económico del que fueron desplazados los ex banqueros?

Lo que está en el fondo de todas estas interrogantes no es otra cosa que la cuestión del pacto social y de la hegemonía: ¿se fortalece y reafirma la hegemonía de la burocracia política por la vía del fortalecimiento del Estado? o, por el contrario, ¿se "occidentaliza" y liberaliza finalmente el régimen mexicano?

La orientación política del nuevo equipo gubernamental, tecnocrática, moralista y antipopulista, se había venido dibujando ya desde la campaña presidencial, pero la nacionalización al abrir abruptamente una nueva

coyuntura que encierra tanta conflictividad, exige también definiciones nuevas referidas a problemas y cuestiones de tanto fondo como las antes apuntadas.

La propuesta gubernamental afrontará las cuestiones fundamentales de tal manera que en su paquete de proposiciones pueden encontrarse elementos que apuntan en direcciones diferentes y hasta opuestas. De un lado están el conjunto de propuestas que podemos llamar “gobiernistas”, no gratas a los empresarios. Entre ellas están: la confirmación de la nacionalización bancaria (pese a que se devuelve una parte); una redefinición de la “economía mixta” que incluye: la declaración constitucional de que el Estado será el rector del desarrollo nacional (aunque se fijan límites a su intervención en la actividad económica), el reconocimiento de un “sector social” integrado por ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas de trabajadores, etcétera, con derecho a participar —igual que el sector privado— en el sistema corporativo para la planeación del desarrollo, y una redefinición del desarrollo rural integral.

Pero el paquete de ofertas del gobierno contiene también una serie de proposiciones “privatistas”, que esperaban oír los empresarios. Entre ellas destacan: una política económica sintetizable en la fórmula del “realismo económico” que se identifica con la ortodoxia monetarista; un discurso gubernamental tecnocrático y moralista que repudia al populismo, e implícitamente acepta la tesis empresarial que explica las causas de la crisis por la ineficiencia, corrupción y demagogia del propio gobierno; el auncio de la devolución parcial de la banca a los empresarios, las promesas de indemnización a los expropiados y venta de las acciones de las empresas industriales, comerciales, etcétera, que eran propiedad de los mismos bancos; la fijación de límites constitucionales a la expansión de la actividad económica estatal; el reconocimiento de un derecho del sector privado a participar en un sistema corporativista para la planeación del desarrollo; el establecimiento de nuevas garantías a la seguridad de la tenencia de la tierra en el agro, y la confirmación constitucional de la legitimidad del régimen capitalista y del sector privado.

Algunas de las propuestas del nuevo gobierno, tanto las que podemos llamar “privatistas” como las “gobiernistas” se concretaron pronto en reformas constitucionales que el Congreso aprobó en el mismo diciembre de 1982 y las legislaturas locales de los estados en los primeros meses de 1983.

A continuación describiremos brevemente el contenido del conjunto de las propuestas gubernamentales, a excepción del tema relativo al realismo económico, el cual abordaremos de manera especial en la sección III.

2.1. *Propuestas de contenido gobiernista*

a) En primer término, la confirmación de la nacionalización bancaria

quedará jurídicamente sancionada en el artículo 28 de la Constitución, en donde se establece que el servicio público de banca y crédito “será exclusivamente por el Estado” y “no será objeto de concesión a particulares”.

El espaldarazo constitucional a la expropiación de la banca, no obstante la devolución parcial contenida en la ley reglamentaria, tiene el significado profundo de confirmación del acto disruptor de la alianza entre el gobierno y los empresarios, y no sólo no pone fin a la coyuntura de conflicto abierta el 1 de septiembre de 1982, sino que la potencia al disipar del todo las últimas esperanzas de algunos sectores empresariales, que todavía confiaban en la devolución.

b) En segundo lugar, la redefinición de la economía mixta cuyos componentes principales son: la declaración constitucional de la rectoría del Estado y el reconocimiento, también constitucional, de un tercer sector —el sector social— como partícipe de un sistema nacional de planeación.

La rectoría del Estado no es una propuesta novedosa; de hecho, en el transcurso de los últimos años las mismas organizaciones empresariales han asumido este principio en sus documentos. Sin embargo, ubicada en el contexto del conflicto por la nacionalización de la banca, la fuerte crítica de sectores empresariales a esta propuesta podría interpretarse como una confrontación con el gobierno por fijar a este principio un sentido privatista que reduzca el poder de decisión del mismo.

El carácter gobiernista de la rectoría del Estado vendría a complementarse con el artículo 26 relativo a la planeación, que aun cuando reconoce un amplio sistema de participación social, reserva el papel central al Poder Ejecutivo: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine, mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas, e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución”. A ello se sumaría la creación de un mecanismo institucional híbrido, ni estrictamente ciudadano ni estrictamente corporativo —los foros de consulta popular— que deja un margen de incertidumbre a la participación empresarial.

c) La tercera medida “gobiernista”, contemplada en el artículo 25, se refiere al reconocimiento del “sector social” y su derecho a participar en la planeación del desarrollo.

Esta medida jurídica, que al igual que la anterior desató una fuerte crítica empresarial, confirma y da fundamento a una estrategia gubernamental tripartita, que reconoce la existencia de “clases sociales” y menoscaba el embate empresarial, por la instauración de una estructura bipartita en la toma de decisiones, al mismo tiempo que potencia la formación

de una oposición gobierno-sector social *vs.* empresarios, tal como fue vivida por éstos en la época de la Comisión Nacional Tripartita en el gobierno de Echeverría.

d) Finalmente, una medida gobiernista más, es la facultad concedida al Estado por el nuevo párrafo xx del artículo 27 constitucional, que dice: "El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público".

2.2. *Propuestas de contenido privatista*

a) La primera propuesta privatista se expresa en la política económica "realista", que dada su importancia consideraremos en otro capítulo de este trabajo.

b) El discurso gubernamental. El discurso gubernamental con que debuta el nuevo equipo, desde la campaña misma, se caracteriza por los siguientes atributos: es moralista y tecnocrático, repudia el populismo e implícitamente acepta la tesis empresarial, que explica las causas de la crisis por la irracionalidad, la ineficiencia, la corrupción y la demagogia del propio gobierno.

Se trata pues, de un discurso que acoge algunas de las principales críticas y temas del discurso opositor de los empresarios, y en ese sentido es, desde luego, un elemento privatista fundamental del paquete de propuestas gubernamentales.

Esta señalada coincidencia discursiva funcionará como un elemento catalizador de primera importancia, que facilita el entendimiento y la reconciliación entre los empresarios y el gobierno, al establecer una concepción de las causas de la crisis y un lenguaje comunes a ambos sectores.

En un principio, durante la campaña presidencial del candidato de la Madrid, apareció el sintagma *renovación moral*, cuyo primer significado fue el reconocimiento de una profunda y difundida arbitrariedad policiaca que debía combatirse mediante la modernización, la racionalización y la moralización de todos los cuerpos policiacos establecidos en el país, sometiénolos ante todo al cumplimiento estricto de la *legalidad*.

Más tarde, en la medida que el relevo presidencial se acercaba y las facciones burocráticas tendían a dividirse, el mismo sintagma de *renovación moral* se enriqueció con nuevos significados, en buena parte tomados del discurso empresarial, que se expresan como crítica a la *gran corrupción*,

el *nepotismo*, la *improvisación* de decisiones y el *derroche* de los recursos públicos, que en buena medida caracterizaron a la gestión del equipo que concluía su período.

Puede distinguirse luego un tercer desplazamiento del significado de renovación moral, que se explicita en la forma de apelaciones a la *austeridad*. Austeridad que por una parte se manifiesta como *austeridad republicana*, es decir, necesidad de que el gobierno y sus funcionarios rechacen el boato y el derroche del pasado inmediato, adoptando un estilo de gobierno que se caracterice por su *sencillez*. Eso por una parte; pero por otra, el mismo imperativo de la *austeridad*, mediante nuevos desarrollos significativos que lo vinculan a la noción de *racionalidad*, realizará la operación de articular el sintagma original de *renovación moral*, que caracterizó el discurso oficial en general, con el sintagma *realismo económico* en torno al cual se construyó el discurso particular de la política económica, según se verá en la siguiente sección.

En efecto, la austeridad entendida como *sencillez* en el estilo, *moderación* en las conductas públicas y *ahorro* de los recursos, irá tiñéndose cada vez más de la noción de *racionalidad*, racionalidad que se entiende crecientemente como *racionalidad eminentemente técnica*, despolitizadora de los problemas y progresivamente *tecnocrática*, que caracteriza al discurso de la política económica centrado en el realismo económico.

Otra de las conexiones discursivas que se establece, es la que vincula la austeridad moral y técnica con la *franqueza* que hace reconocer, de manera pública y a veces descarnada, el *peso de lo fáctico*, tanto en la forma de asunción de la *gravedad de la crisis* y la *limitación de alternativas* para enfrentarla, como en el reconocimiento de que habrá que pagar un *costo social* mediante el *sacrificio* (nótese en el empleo de este término la reverberancia del elemento moral típico del sintagma original) de algunas demandas populares.

De ese modo tendremos al final, como producto de la acumulación y articulación de significados derivados de los sintagmas originales (renovación moral y realismo económico), un discurso que condena radicalmente al *populismo* por considerársele ilegal, corrupto, demagógico, derrochador, irracional e ineficiente, justamente en los términos en que lo venían planteando los empresarios.

De ahí a admitir una explicación personalizada de la crisis sólo hay un paso, y el discurso gubernamental lo da: la crisis será presentada no tanto como la consecuencia de graves problemas estructurales, que ponen de manifiesto los límites de un modelo de desarrollo seguido desde hace décadas, sino como el producto de las iniciativas populistas tomadas voluntariamente por los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo.

c) Por otra parte, la devolución parcial de la banca fue un acto fundamental en la propuesta gubernamental, de bases para la redefinición de la alianza, ya que rectifica, así sea parcialmente, la medida quebrantadora

de la alianza y desencadenante de la nueva coyuntura. A diferencia de las otras propuestas examinadas hasta aquí, no se trata de normas o principios sino de un acto de reprivatización parcial, que pretende dar pruebas concretas de que “no se estatiza la sociedad”.

Con la nueva permisibilidad de inversión privada, así sea limitada al 34% del capital de la banca nacionalizada, se abrió el camino para que antiguos banqueros y poderosos empresarios volvieran a desempeñarse como consejeros de los bancos. Es el caso por ejemplo de Prudencio López Martínez, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Concamin, que al asumir el cargo de consejero propietario “B” del Banco Mexicano Somex declaró: “nos sumamos al compromiso de operar la banca nacionalizada con criterios rigurosamente técnicos y de escrupulosa honradez” (*El Universal*, 27 de diciembre de 1983).

Con la devolución parcial de la banca se ofrece también la indemnización a los expropiados y la venta de las acciones no bancarias que poseía la banca privada.

d) Limitación de la expansión de la actividad económica estatal. Éste es uno de los puntos centrales de la propuesta gubernamental a los empresarios. Se trata de un elemento más de la redefinición de la idea de “economía mixta” que ha sido fuente permanente de fricciones y ha constituido una demanda constante de los empresarios, sobre todo después de la nacionalización bancaria. Lo esencial de esta reforma fue la fijación de obstáculos legales para una eventual expansión de la actividad económica estatal, dando así ciertas garantías a los empresarios de que no habrá más nacionalizaciones de sectores económicos por la vía de simples decretos o acuerdos presidenciales, sin la participación del poder legislativo, tal y como fue en los históricos casos de los ferrocarriles y el petróleo en los años treinta, la energía eléctrica en 1960 y la banca en 1982.

El nuevo artículo 28 establece ahora que el Estado se circunscribirá a ejercer funciones económicas en forma exclusiva en las siguientes actividades estratégicas: moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía, comunicación vía satélite, emisión de billetes, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y energía nuclear, electricidad, ferrocarriles y banca. Cualquier ampliación de este catálogo de actividades de la incumbencia exclusiva del Estado requerirá ahora de una ley previa que expresamente la apruebe. Es significativo que la original iniciativa de reforma de De la Madrid contemplaba la necesidad de reformar la propia Constitución, cuando se tratase de ampliar esta órbita de actividades económicas estatales. Es decir, el freno que se iba a poner al estatismo era todavía más fuerte.

La reforma entonces tiene un doble carácter: limitante de la esfera estatal, en lo que hemos insistido hasta ahora, pero también limitante del poder del presidente de la República, en beneficio del Poder Legislativo. Con ello la reforma dio una clara acogida a las ruidosas protestas de los

empresarios y a la derecha toda, que a raíz de la nacionalización de la banca y sobre todo en las reuniones de “México en la libertad”, se expresaban como reclamos en contra del excesivo y concentrado poder del presidente, como impugnación de la legalidad que permite que un solo hombre, sin intervención de los otros poderes, decida cuestiones tan fundamentales para la nación, y como denuncia del autoritarismo del gobierno mexicano.

e) Reconocimiento del derecho del sector privado a participar en un sistema corporativista para la planeación del desarrollo.

Los nuevos artículos 25 y 26 de la Constitución establecen al respecto que “al desarrollo económico concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado...” y que “la planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”.

f) Garantías a la tenencia de la tierra en el agro. Esta propuesta “privatista” se condensa en la nueva fracción XIX del artículo 27 constitucional, donde se dice que el Estado “...dispondrá de medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad...” Se refuerza así la garantía para todas las formas de tenencia de la tierra, la privada incluida, dando respuesta a añejas demandas de los terratenientes. Este sentido parece afirmarse en otras reformas a la legislación agraria, que tienden a descentralizar la administración de la justicia agraria y trasladan a otras instancias muchas de las facultades que antes eran competencia exclusiva del presidente de la República, abriendo así a los propietarios nuevos espacios jurídicos para la negociación y defensa de sus intereses.

g) La última reforma que consideramos es la del artículo 26 constitucional que después de reconocer al Estado como el titular de “la rectoría del desarrollo” hace una amplia confirmación de la legitimidad del régimen capitalista y de la clase empresarial.

El nuevo precepto, articulándose con los contenidos de otros mandatos de la misma Constitución, como el 123, que reconoce la legitimidad de patrones, obreros y trabajadores, de los factores de la producción: capital y trabajo, las empresas y los empresarios, y el 27, que reconoce la propiedad privada, confirmará ahora, de manera aún más explícita, la legitimidad del sistema capitalista en México. Ello lo hace admitiendo un derecho al “...pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”; al establecer la concurrencia del “sector privado” al desarrollo nacional, el “apoyo e impulso” del gobierno, con ciertas restricciones, a sus empresas, y estableciendo que “la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares...”

Aunque es cierto que estos reconocimientos en favor de los empresarios quedan sujetos a algunas condiciones, modalidades y restricciones como "criterios de equidad social y productividad", "interés público", "beneficio general", "términos que establece esta Constitución", etc., el resultado neto es un afianzamiento jurídico, político e ideológico de esta clase social.

El balance de este paquete de oferta de bases para la redefinición de la alianza arroja un saldo estatista, ante todo porque a pesar de las múltiples medidas privatistas que contempla, confirmó la nacionalización bancaria, cancelando así las esperanzas que tenían algunos sectores empresariales de una completa reversión de la decisión expropiadora por parte del nuevo gobierno.

El carácter estatizante de la oferta gubernamental, apoyada sobre todo en el binomio nacionalización bancaria-rectoría del Estado, se enfrentará a una reactivación de la acción empresarial que retomando las críticas a la nacionalización, el autoritarismo oficial y a la gestión gubernamental de López Portillo, se manifestará en 1983 y 1984.

III. EL REALISMO ECONÓMICO

"Sin reservas, la iniciativa privada apoya la recuperación..."
Goicochea, presidente de la Concanaco y representante de la línea más radical de los empresarios, ante el PND dado a conocer el 31 de mayo de 1983 (*Excelsior*, 1 de junio de 1983).

Podríamos decir que la renegociación de la alianza entre el gobierno y los empresarios, a raíz de la nacionalización de la banca, se ha venido efectuando por dos vías principales: por la vía del contenido de la política económica y por la vía de una negociación de los términos de la participación empresarial en las decisiones gubernamentales. La primera corresponde a una negociación sobre los recursos materiales disponibles; la segunda, involucra un proceso de privatización institucionalizada, formalizada, de las decisiones públicas.

Si en el período anterior a los años setenta la negociación sobre aspectos diversos de la política económica había asegurado la participación empresarial en las decisiones gubernamentales, es decir, si en aquellas décadas el contenido de la política económica y la participación empresarial estaban estrechamente ligadas, la ruptura de los canales de comunicación entre el gobierno y grupos empresariales durante la administración del presidente Echeverría, y la decisión unilateral de la nacionalización de la banca, tuvieron el efecto de disociar estos dos aspectos de las relaciones entre el gobierno y los empresarios. A partir de esos conflictos, las coinci-

dencias entre el gobierno y los empresarios sobre los principios de la política económica no serían suficientes para acordar una alianza, había que asegurar también la institucionalización de formas de participación en las decisiones gubernamentales.

Ha sido más o menos evidente que la "recuperación de la confianza" ha ido consolidándose con mayor éxito y con mayor definición por la vía de la política económica. En esta sección nos interesa destacar tres cuestiones: primero, los elementos más generales que conforman un terreno de acuerdo para replantear la alianza entre el gobierno y los empresarios; segundo, las discrepancias más importantes que en el primer año de gobierno se produjeron en materia de política económica, y tercero, ubicar los sectores empresariales más favorecidos y más afectados en la aplicación de la política económica, con el propósito de dilucidar cuáles son las bases sociales que empieza a conformar el proyecto gubernamental.

1. *El realismo económico*

"El realismo económico no es un dogma, sino una concepción plena de lo que verdaderamente beneficia la economía del país..." Barragán de Palacio, presidente de la Canacintre, al hablar sobre los propósitos del gobierno para 1984 (*Uno másuno*, 7 de enero de 1984).

El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), así como documentos posteriores que versaron sobre el mismo tema, como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), fueron, en términos generales, ampliamente aprobados por la iniciativa privada. La política económica se fue convirtiendo casi de manera inmediata en el símbolo de la recuperación de la confianza, quedando sujetos a negociación sus aspectos más específicos, la instrumentalización de sus principios y la definición del cuadro institucional que garantizara su ejecución.

El PND (1983-1988) contendría los principales ajustes pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en noviembre de 1982 y que, en diciembre de ese mismo año, fueron integrados al PIRE. El programa económico se centró en la recuperación de los ritmos de crecimiento de la economía mexicana mediante la reducción de la inflación, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la elevación del ahorro interno, la protección del empleo, la planta productiva y el consumo básico.

Si bien en los diversos documentos sobre la política económica del nuevo gobierno persistió la línea general que garantizaba los nuevos acuerdos con la banca internacional, se irían introduciendo nuevos elementos, y particularmente, el PND contendría una visión más general del desarrollo nacional. Pero en la base de las continuidades y de las modificaciones de la política económica, subyace lo que ha venido a constituir un terreno

compatible de negociaciones entre el gobierno y los empresarios, después de la ruptura de septiembre de 1982: el realismo económico.

El realismo económico no es una fórmula original; está asociado con las recetas de la ortodoxia monetarista, entre cuyas medidas destacan la reducción drástica del gasto público, la liberalización de precios y la implantación de topes salariales; el realismo económico reconoce también, aunque no de manera explícita, la teoría de las ventajas comparativas, que para México implica una mayor integración de la economía nacional a la norteamericana, sobre bases que supondrían una reordenación del modelo de acumulación orientando la economía hacia el exterior. Pero lo que nos interesa observar a continuación es la expresión y la significación ideológico-política que entraña el realismo económico.

La versión nacional del realismo económico es lo que el secretario de Programación y Presupuesto denominó "la austeridad revolucionaria" y que construiría "como oposición a la austeridad regresiva" y a la "opción populista". (Documento. Discurso de Carlos Salinas de Gortari, *Unomásuno*, 22 de noviembre de 1983.) Esta construcción es sin duda una muestra sorprendente de la capacidad de adaptación que tiene el discurso oficial de los gobiernos posrevolucionarios a medidas no solamente variadas sino incluso opuestas.

Lo que vino a justificar tal diferenciación fue la inclusión, retórica, de la protección al consumo popular mediante un cada vez más difícil y cada vez más reducido control de precios y los programas llamados de carácter social, dirigidos a atenuar la política de austeridad. Estos programas se enfocaron básicamente al problema del empleo (tales como los programas de empleo de las zonas rurales y en las zonas urbanas marginadas) y de la salud pública. De manera explícita, en el discurso arriba citado se manifiesta que "en la austeridad la equidad está principalmente en conservar los empleos existentes". Cabe señalar que aun siendo ésta la carta social más importante de la política gubernamental, en ella necesariamente se contemplan beneficios directos a la empresa privada. El programa más importante de esta política de empleo fue el programa de protección de la planta productiva, que contempló medidas de apoyo financiero y de cobertura cambiaria. (Véase "Informe sobre la situación económica del país. Acciones y resultados del primer trimestre de 1983". Documento, *Unomásuno*, 18 de abril de 1983).

Por encima de las diferencias entre el gobierno y los empresarios, hay una visión coincidente sobre la crisis y la manera de resolverla. Respecto a este problema destaca, en primer término, una visión que intenta subordinar o excluir los "asuntos políticos" en el intento por alcanzar ciertas metas, o más propiamente, de ciertos datos económicos y en donde los "asuntos políticos" conciernen precisamente a los efectos que tenga sobre la sociedad la política de austeridad, volviéndose entonces prioritaria la recuperación de la confianza empresarial. En el marco del discurso oficial

y empresarial tales asuntos políticos contribuyen a empañar los llamados criterios “rigurosamente técnicos”.

En segundo término, el realismo económico está relacionado con el reconocimiento oficial de que el causante originario y principal de la crisis fue el Estado, o más específicamente, la estrategia económica seguida en el período reciente anterior. Con ello, el conflicto gobierno-empresarios se diluye y se desplaza hacia la relación gobierno-sector obrero, el que habrá de demostrar su solidaridad mediante una “moderación salarial”, reforzándose así la prioridad de la alianza gobierno-empresarios.

El carácter “revolucionario” de la política de austeridad consiste en reconocer el costo social del programa económico, sin propósitos de modificarlo en el corto plazo, y en el mejor de los casos, subordinado a la eficacia técnica y a la eficiencia económica.

Manifestación explícita de esta concepción la encontramos en diversos documentos oficiales. Así por ejemplo, el presidente Miguel de la Madrid afirmaría, en el marco del PIRE, “que para combatir la crisis se requería de un ajuste económico drástico que inevitablemente tendría un costo social...”, y en el primer informe de gobierno expresaría que, con el programa de reordenación económica, “se buscaba recuperar la estabilidad indispensable para el funcionamiento de la economía, mediante decisiones realistas y firmes, por más duras que parecieran”, lo que implicó, entre otras cosas, que no se concedieran los aumentos salariales de emergencia solicitados en la primavera de 1983. (Véase *Unomásuno*, 14 de noviembre de 1983.)

Como parte del reconocimiento del costo social de la política económica, se ha venido manejando también la vieja tesis desarrollista de que primero hay que producir para entonces repartir. Como ejemplo particular destaca la carta de intención que propone el gobierno mexicano al FMI a principios de 1984: “la experiencia ha demostrado que ajustes automáticos de salarios en relación a los aumentos de precios observados en el pasado son contraproducentes...”, para una mejoría real hay que esperar “al restablecimiento de un sólido crecimiento de la economía” (tomado de Jorge A. Villamil, *Unomásuno*, 7 de febrero de 1984). En un sentido más general, el secretario de Programación y Presupuesto afirmaría que “la reordenación económica es el costo que debemos pagar para que los mexicanos podamos acceder no sólo a fuentes de trabajo, sino a una mejor distribución de los frutos del crecimiento”. (C. Salinas de Gortari, Documento, *Unomásuno*, 22 de noviembre de 1983.)

Por otra parte —y como ya lo señalábamos—, el reconocimiento oficial de que el gobierno fue el causante principal de la crisis constituyó otra de las bases de la construcción de un discurso común en torno al realismo económico.

Los diversos diagnósticos elaborados por las organizaciones empresariales reiteradamente señalan que la crisis económica se debió a la política

que a este respecto se siguió en el período inmediato anterior. Así por ejemplo, el CEESEP (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, filial de análisis del CCE) indica que “la crisis que el país experimenta es resultado de la estrategia económica aplicada por el gobierno durante los últimos doce años [es decir, a partir del sexenio de Echeverría]... de tal manera que sus causas son fundamentalmente internas y estructurales, originadas principalmente por el exceso de gasto público, utilizado como principal estimulante en el crecimiento de la economía”. El documento señala también, que el gasto público fue financiado, cada vez en mayor proporción, con emisión de circulante y endeudamiento externo. (*Unomásuno*, 24 de marzo de 1983.)*

El gobierno asumirá esta visión mediante diversas acciones y discursos. Es así que el director del Banco de México afirmaría de manera categórica ante representantes de los sectores público y privado, que “el gobierno fue el causante originario y principal de la crisis”. (*El Universal*, 27 de diciembre de 1983.) Con ello se exculpaba a los miembros del sector financiero privado y se abría el camino para modificar su imagen de “saqueadores” (último informe de gobierno de López Portillo) a empresarios de “reconocida calidad moral” (Ley Reglamentaria de la Banca y Crédito).**

Por otra parte, la reducción del déficit público, como estrategia central de la política económica esbozada en los inicios del gobierno, vendría a embonar perfectamente en los términos de esta concepción sobre los problemas económicos.

En el curso de las relaciones entre el gobierno y los empresarios, los referentes específicos de los causantes de la crisis: la estrategia económica y el gobierno, irían adquiriendo mayor definición. Respecto a la primera destacan aspectos de la política de subsidios, del abastecimiento de productos básicos y el control de precios, que serán vistos por los empresarios como reminiscencias de un pasado populista, que se opone a los principios del realismo económico y la racionalidad técnica. Respecto al gobierno,

* Cabe señalar que esta última opción no fue privativa del sector público. El Grupo Monterrey (Visa, Alfa, Vitro y Cydsa), uno de los promotores más importantes del CCE, participaría con el 30% del total de la deuda externa privada (Centro de Información y Estudios Nacionales, *Unomásuno*, 5 de octubre de 1983). Cabe señalar también que este grupo no requería del aval del gobierno para la contratación de créditos con el exterior.

** El *Federal Reserve Bulletin*, en una noticia sobre México, destaca el “comportamiento especulativo” de los tenedores de dólares, quienes en los siete primeros meses de 1983 habían depositado en la banca estadounidense 9 452 millones de dólares. (*Unomásuno*, 15 de noviembre de 1983.) Este dato, aun considerando que no corresponde del todo con el concepto anterior, contrasta con el informe del Banco de México del 23 de septiembre de 1983, en el que se señala que durante el primer semestre del año, la fuga de capitales fue de sólo 325.8 millones de dólares. Por otra parte, la Bolsa Mexicana de Valores aludiría al hecho de que los empresarios estaban especulando con dólares subsidiados. (*Unomásuno*, 15 de noviembre de 1983.)

los referentes serán las personas, los actores públicos, portadores del populismo y de la corrupción. De aquí que se diera una estrecha relación entre el realismo económico y la fórmula gubernamental de la renovación moral.

La construcción del realismo económico como oposición a lo que en el lenguaje oficial y empresarial se ha llamado la "opción populista" tiene sus antecedentes más recientes y novedosos en el gobierno de López Portillo. En el gobierno de De la Madrid el populismo es definido por el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, como "la falsa búsqueda del progreso social, con pretensión de soluciones sin costo, que provoca el desorden económico, conduce a la frustración social y desemboca en la inestabilidad política". (*Unomásuno*, Documento, 22 de noviembre de 1983.) Se trata de una exaltación de la racionalidad técnica por encima de criterios de índole política.

Sin embargo, en el marco de las relaciones entre el gobierno y los empresarios, persisten desacuerdos sobre los términos y los alcances de esta racionalidad. Si bien se coincide en referirla a una racionalidad técnica, con frecuencia contable, de los recursos y procesos bajo control estatal, y a una "transparencia de las reglas del juego", en el discurso empresarial se ha venido introduciendo un reiterado ataque a la discrecionalidad gubernamental, cuya contraparte ha sido una demanda de institucionalización y ensanchamiento de la participación privada en las decisiones públicas. Por otra parte, algunas organizaciones como la Coparmex y el cce, han pugnado por una racionalidad electoral.

2. *Las discrepancias*

"Es imposible que en un solo año de la presente administración se recupere la confianza que durante 12 años fue dilapidada", Canacintra. (*El Universal*, 7 de diciembre de 1983.)

Durante el primer año de gobierno de Miguel de la Madrid, tanto el conjunto de las organizaciones empresariales como los empresarios extranjeros demandaron lo siguiente: la devolución de las acciones industriales en poder de la banca nacionalizada, la eliminación progresiva de los subsidios estatales, la eliminación progresiva de los controles gubernamentales (tales como el control de cambios y los controles a la importación) y flexibilidad en materia de inversión extranjera; respecto al marco directo de aplicación de la política económica hubo una demanda constante de la definición de las reglas del juego. Las organizaciones empresariales mexicanas en particular impugnaron el control de precios y demandaron la descentralización de la política de salarios y la disminución del costo del financiamiento bancario. Por otra parte, la Canacintra demandó la reprivatización de la agricultura (*El Universal*, 7 de diciembre de 1983) y junto con la Concanaco, la eliminación de aquellas empresas estatales que repre-

sentan una “competencia desleal” para la empresa privada. Como lo expresaría el vocero de esta última organización, las negociaciones sobre subsidios, control de precios y abasto de productos básicos se encontraban “empantanadas”. (*Unomásuno*, 18 de enero de 1984.)

Todas estas demandas estuvieron ampliamente consideradas en la agenda pública y, de manera más apremiante, en los lineamientos contenidos en la Carta de Intención para 1984 y en los documentos que sustentan la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación para 1984. Aunque podríamos decir que el problema general ha sido de tiempos y de límites, en cuanto a la política de subsidios se han venido generando concepciones distintas que parecen afectar también a la unidad empresarial.

Si bien en el marco del realismo económico hay un acuerdo básico de reordenar las finanzas públicas por medio de la restricción del gasto público, la cuestión más problemática es cómo fortalecer los ingresos. Una vez que ha quedado claro que no habrá modificaciones sustanciales en la política impositiva (véase Criterios Generales de Política Económica para 1984), el problema principal radica en la eliminación de los subsidios.

Tanto la restricción del gasto público como la eliminación de los subsidios afecta diferencialmente al sector empresarial, sin embargo el núcleo de las discrepancias lo ha venido a constituir el manejo de los subsidios. Como ya lo señalábamos, hay un acuerdo manifiesto entre la política gubernamental y el conjunto de las organizaciones empresariales sobre la progresiva eliminación de los subsidios y la aplicación de criterios técnicos para tal efecto; el problema está en los términos específicos de esa racionalidad.

Desde la perspectiva de las expresiones de las organizaciones empresariales podemos destacar lo siguiente: mientras que el sector exportador a través del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales se pronuncia por “no subsidiar las ineficiencias” y guarda silencio sobre los dólares subsidiados (*Unomásuno*, 16 de noviembre de 1983), la Canacindra centra su preocupación en los subsidios a las empresas paraestatales, las que, dice, “representan una competencia desleal”. (*El Universal*, 7 de diciembre de 1983.) En un ataque más directo a los subsidios de carácter social, el vicepresidente de la Comisión de Estudios Legislativos del CCE, Sánchez Mejorada, expresaría que “la recuperación del país sólo será posible en función de la correcta aplicación del gasto gubernamental durante 1984 y en la moderación del Estado para no convertir en una acción permanente la política de subsidios, con el pretexto de ayudar a la población de escasos recursos”. (*Unomásuno*, 17 de diciembre de 1983.)

Las reacciones más agudas de los empresarios se produjeron con los incrementos de los precios de bienes y servicios estatales, y en particular de los incrementos en los bienes básicos utilizados por las empresas privadas. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reacción al aumento de los precios del acero en enero de 1984, cuando la Secofin (Secretaría de Comercio y Fo-

mento Industrial) calificó de incongruente la postura empresarial, mientras que la Canaco amenazó con la “desconfianza” del sector privado. (Véase *Unomásuno*, 18 de enero de 1984.)

En el interior del conjunto del sector privado el problema de los subsidios se ha venido a complicar aún más, por las demandas al Departamento de Comercio norteamericano de los productores de ese país, de que se establezcan impuestos compensatorios a algunas exportaciones mexicanas por los subsidios estatales. A estas demandas se han venido sumando otras encaminadas a liberalizar el comercio (véase *El Universal*, 24 de febrero de 1984, en donde se resumen los documentos presentados por los empresarios estadounidenses con relación a la política de comercio exterior del gobierno mexicano, lo que ha puesto en una situación de tensión la estrategia gubernamental, en buena medida apoyada en una política de exportación.

Un segundo aspecto de la política económica que ha empañado la relación entre el gobierno y los empresarios es el control de precios, aun cuando cada vez es más retórico y más reducido. El control de precios es considerado por las organizaciones empresariales como una política populista, como una reminiscencia de los errores más graves de las administraciones pasadas. (Véase *Unomásuno*, 18 de enero de 1984.)

En los términos de la racionalidad empresarial, tanto el control de precios como los incrementos salariales “perjudican unilateralmente al pueblo”, el primero porque acaba con los productores de básicos (editorial de M. J. Clouthier, en *El Universal*, 4 de enero de 1984), el segundo porque perpetúa la inflación. (Véase por ejemplo, Canacintre, *Unomásuno*, 23 de abril de 1983.)

Para dar una idea de las dimensiones del realismo empresarial cabe señalar que durante el régimen de Miguel de la Madrid la cantidad de bienes sujetos a control se redujo considerablemente y que en diversos documentos se promete llegar a una liberalización total (como es el caso, por ejemplo, del Programa Nacional de Alimentos). De acuerdo con informes de la Secretaría de Programación y Presupuesto y del Banco de México, en 1983, los productos básicos experimentaron un aumento del 60%, en términos del índice de precios al consumidor.

Por otra parte, la capacidad estatal del control de precios se ha vuelto muy difícil, entre otras cuestiones por la monopolización que ha venido consolidándose en los últimos veinte años. En términos generales, en 1979 y 1980, diez de las cien empresas industriales más grandes concentraban 58 por ciento de las ventas y 73 por ciento del capital contable de esas cien. (*Excelsior*, 17 de enero de 1983.) Un caso alarmante, por su impacto social, es el de la industria alimentaria, en donde de acuerdo con los datos contenidos en el Programa Nacional de Alimentos, se señala que el 1 por ciento de las empresas genera el 65 por ciento de la producción global; en un estudio de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se

destaca el alto grado de control extranjero de parte importante de productos de esta industria, y el Instituto Nacional del Consumidor constata el comportamiento monopólico y especulativo de esta rama. (Véase *Unomásuno*, 7 de enero de 1984.)

3. *Las bases sociales del proyecto gubernamental*

Tanto en la lectura de los lineamientos generales de la política económica como de las acciones emprendidas, en el primer año de gobierno podemos encontrar referencias de apoyo al conjunto del sector empresarial. Sin embargo, una clave importante del discurso oficial es la voluntad expresa de aplicar de manera selectiva los controles y los apoyos estatales, lo que afecta de manera diferenciada a los empresarios.

En este sentido destaca la prioridad del sector exportador, tanto en la reorientación del aparato industrial como en la estrategia global, al cual, en buena medida, se le orientará hacia la producción de bienes "comerciables". (Véase en particular el PND 1983-1988.) Esto parece ser consecuencia, entre otras razones, de las restricciones en el incremento del mercado interno, de los límites del endeudamiento externo y del permanente problema del déficit comercial. Como parte de esta política, se ha venido promoviendo la apertura al capital extranjero, si bien, en principio no indiscriminada.*

Podemos observar que ya como consecuencia misma del carácter de la crisis, algunos sectores y grupos económicos se han visto más afectados que otros, que incluso han obtenido ganancias espectaculares. Tal es el caso del Grupo Alfa, para el primer conjunto, y del Grupo Cydsa, para el segundo (de acuerdo con informaciones de la Bolsa de Valores). En un estudio realizado por Banamex sobre los últimos siete años de actividad económica se muestra que los renglones que han venido siendo más afectados han sido aquellos cuyas ventas tienen estrecha correlación con la inversión que genera el sector público y con las disponibilidades de financiamiento, así como los que dependen de las importaciones en una mayor medida, o los que están sujetos a controles de precios. Las ramas que pierden mayor participación relativa en su valor agregado dentro de la industria y durante ese lapso son: construcción, alimentos, automóviles, siderurgia básica, aparatos electrodomésticos y maquinaria. Por otra parte, las ramas que elevan su capacidad participativa o que no la pierden son:

* Un informe del CESP señala que en el primer semestre de 1983 se registraron 48.7 millones de inversión extranjera directa, mientras que por concepto de utilidades y regalías para las empresas centrales se registraron 220.5 millones de dólares, "lo que significa que por cada dólar que por concepto de inversión extranjera directa ingresó al país, salieron 4.52 dólares". (*Unomásuno*, 5 de octubre de 1983.)

petróleo, petroquímica, electricidad, minería, papel, textil, vestido y bebidas. (Véase *Unomásuno*, 10 de enero de 1984.)

Si nos remitimos al cuadro general de prioridades de la política industrial contenido en el PND, encontramos que las prioridades son tantas que los dos conjuntos de ramas arriba señalados —a excepción de las bebidas— están de alguna manera contemplados en ese cuadro general, es decir, que se encuentran citados directamente o desde la perspectiva de la promoción de bienes básicos y de capital como son los casos de la industria de la construcción, la minería y la industria eléctrica.

Más allá del énfasis que se la ha venido dando al sector exportador y a la inversión extranjera, una clave que desde esta perspectiva general nos introduce al esbozo de las bases sociales del programa gubernamental es la del financiamiento.

En primer término, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público advierte que “la empresa privada sólo debe recurrir al crédito externo para financiar proyectos productivos que generen divisas”. (*Unomásuno*, 9 de junio de 1983.) De aquí no es difícil suponer que un selecto número de empresas capaces de competir en el mercado internacional serían particularmente apoyadas para la renegociación de su deuda externa y para la contratación de nuevos créditos con el exterior.

Por otra parte podemos observar que al menos en lo que correspondió al primer año de gobierno y de acuerdo a informes del Banco de México, entre 1982 y 1983 no hubo cambios sustanciales en la estructura del financiamiento bancario. Es decir, que hay una continuidad respecto a la concentración geográfica del crédito y respecto a los sectores a los cuales se destina. Se registra solamente un leve descenso en actividades primarias, industriales, de servicios, en favor del comercio y del financiamiento del sector público; el rubro de vivienda de interés social se mantiene inalterado.

Dentro del programa gubernamental a corto plazo, de incrementar los recursos financieros a través del ahorro, el crédito se restringió sensiblemente por las altas tasas de interés que en 1983 se mantuvieron en alrededor de 94.6 por ciento. Como lo señalamos en el apartado anterior, la demanda de abaratar el costo del financiamiento bancario, por parte de las organizaciones empresariales, fue constante. Sin embargo, cabe señalar que paralelamente al financiamiento a través de la banca nacionalizada se fortaleció el financiamiento vía Bolsa de Valores.

La Bolsa de Valores cuenta con 209 empresas: 115 industriales, comerciales y de servicios y 94 de seguros, finanzas y sociedades nacionales de crédito. Por su funcionamiento de selección automática, en la Bolsa se encuentran las empresas más grandes y dinámicas. De acuerdo a informes del Banco de México, de enero a septiembre de 1983, el financiamiento otorgado a través de la Bolsa de Valores, cuyas tasas de interés fueron de alrededor de 30 por ciento menores que las de la banca nacionalizada, superó al de esta última en su conjunto —es decir, al de la banca comer-

cial y de desarrollo. Resalta aquí la magnitud de los créditos otorgados a un selecto número de empresas. (Véase J. A. Zúñiga, *Proceso*, núm. 365, 31 de octubre de 1983.)

IV. LA ACCIÓN EMPRESARIAL

“...el problema fundamental de nuestro país sigue siendo que nuestras autoridades creen que nuestra crisis es sólo económica y que arreglando ésta todo volverá a la normalidad... La verdad es que se ha cuestionado seriamente nuestros sistemas político y educativo: lo social y lo moral... fue el absolutismo del poder el que nos llevó a los excesos y los abusos en el pasado reciente...”. (Editorial de M. J. Clouthier, *El Universal*, 4 de enero de 1984.)

La especificidad de la relación entre el gobierno y los empresarios, y que caracterizará los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid, se remite al problema de cómo y en qué términos consolidar la alianza entre el gobierno y los empresarios a raíz del conflicto por la nacionalización de la banca. Podría decirse que el problema fundamental es el de la participación de los empresarios en distintos ámbitos de la vida pública, considerando que un acuerdo básico sobre el contenido de la política económica no es ya —como lo fue en el pasado— suficiente para consolidar la alianza.

Desde esta perspectiva, la acción política empresarial, eminentemente reactiva y dependiente de las iniciativas estatales, se caracteriza ahora, por un intento de trascender esta naturaleza, por un intento de retener el momento político de la tensión y la acumulación de fuerzas, pugnando por la consolidación de garantías políticas e institucionales como condición para la cristalización de una alianza. Se insinúa así un sujeto empresarial con una nueva voluntad política.

Si bien la cúpula empresarial parece estar unida en torno a esta voluntad política, no parece haber un acuerdo sustancial sobre la modalidad de la presencia empresarial en el escenario público. Se distingue sin embargo, el resurgimiento del aún incipiente pero ya efectivo proyecto empresarial, que apropiándose ahora del discurso de la democracia se lanza contra el presidencialismo y pugna por la instauración de garantías políticas que aseguren una participación empresarial, activa y estable, pública y legítima, en las decisiones gubernamentales.

Tres son las condiciones principales en las que emerge el nuevo sujeto político empresarial: la primera nos remite a los conflictos recientes entre los empresarios y el gobierno; la segunda a las formas de acción desplegadas por los empresarios en esos conflictos, y la tercera, a las condiciones

político estatales, esto es, a las transformaciones institucionales efectuadas en los últimos años.

En cuanto a la primera condición de emergencia del nuevo sujeto empresarial destaca la decisión unilateral de nacionalizar la banca en septiembre de 1982, que encuentra sus antecedentes inmediatos en la ruptura de los canales de comunicación entre el gobierno y los empresarios durante el régimen de Echeverría. De aquí que el nuevo sujeto empresarial se caracterice por una voluntad de asegurar una participación activa y estable, institucionalizada y legítima en las decisiones gubernamentales.

En segundo término, el horizonte del nuevo sujeto empresarial se encuentra parcialmente definido por las formas de acción (véase "Antecedentes") desplegadas en los períodos de tensión. Distinguimos en este sentido tres formas de acción: una de carácter económico-administrativo —como grupos de presión—, ejercida a través de una acción directa y particularista en el seno de la administración central, que tiende a institucionalizar una acción corporativa reactivando las organizaciones empresariales; una segunda forma de acción, de carácter propiamente político, es aquella en la que las organizaciones empresariales, superando la acción como grupos de presión, se comportan como organizaciones de clase que tienden a la unidad, homogeneidad y autoconciencia y que en una segunda instancia se manifiesta a través de los partidos políticos —tanto del PRI como del PAN—; una tercera forma, derivada principalmente de la acción empresarial como movimiento de derecha, y que podríamos llamar de acción cívica, intenta consolidar desde la sociedad civil un espacio de opinión pública, a través de una más intensa intervención ideológico política y el fomento de múltiples y variadas organizaciones de carácter sociopolítico. Estas tres formas de acción constituyen los ámbitos privilegiados de la presencia política empresarial en la actualidad.

Por último, este horizonte de la presencia empresarial en el escenario político se encuentra redimensionado con las transformaciones político estatales efectuadas en el período reciente y que en parte son producto de la dinámica del conflicto. Destacan en este sentido el experimento tripartita del período de Echeverría, las reformas política y administrativa del gobierno de López Portillo y las reformas del gobierno de Miguel de la Madrid.

A continuación, observaremos la acción empresarial en las diferentes esferas que hemos distinguido: la administrativa, la política y la cívica.

1. *La vía administrativa*

Una vieja demanda de los empresarios ha sido siempre la de asegurar su participación en la elaboración de las políticas públicas mediante los conocidos mecanismos de consulta y también a través de un sistema cor-

porativista bipartita en el que los representantes de los sectores público y privado determinen cuáles serán esas políticas. Desde 1964 la *Carta Económica Mexicana* que resume el ideario de la Concamin expresa al respecto que: “A la iniciativa privada y al Estado toca programar su propia actividad en la esfera que a cada uno de ellos les corresponde. Siendo el desarrollo económico, en nuestro régimen, obra de la acción conjunta de la iniciativa privada y el Estado es conveniente establecer sistemas de consulta y crear un organismo nacional, en el que estén representados todos los sectores para lograr a través de ellos una armónica y eficaz coordinación entre las actividades de los particulares y el Estado.”*

Once años después, en 1975, el *Ideario* del Consejo Coordinador Empresarial hizo suya la demanda, con idénticas palabras, en un párrafo igual al que sólo se le suprimió la frase inicial y se le agregó al final otra que reza: “. . . siempre y cuando tal organismo *no pervierta* su finalidad, convirtiéndose en un instrumento de presión política o económica”.**

La frase suprimida iba en contra de toda planeación y la frase agregada tenía una dedicatoria clara: la Comisión Nacional Tripartita (CNT), organismo creado por el presidente Echeverría en mayo de 1971, haciendo suya una proposición del sector obrero y con el objeto declarado de crear un foro en el que se confrontaran los puntos de vista de los sectores público, privado y obrero con relación a los grandes problemas nacionales y la realidad presente y futura del país.

Decimos que la nueva frase estaba dedicada a la CNT, porque la participación del sector obrero en ella y la “perversa” politización que sufrió la comisión en el desarrollo del conflicto entre los empresarios y el gobierno durante ese sexenio, mostró a los empresarios que un organismo de esas características no era útil para garantizar su participación en la elaboración de las políticas públicas. Es por ello que cada vez con más frecuencia se escuchan planteamientos empresariales en los que se insinúa la institucionalización de un organismo de planeación “técnico” y no político y más bien bipartita (que incluya sólo al sector privado y al sector público) que tripartita.

Hacia allá apunta lo establecido en una nueva edición del *Ideario* del CCE en la que otra vez se modificó el mismo párrafo antes citado del documento de 1975, para quedar redactado ahora así: “Siendo en nuestro régimen el desarrollo económico obra de la acción conjunta de la iniciativa privada y del Estado, el sistema de planeación que se establezca habrá de ser obligatorio para el sector público e indicativo para los particulares, y habrá de contar con mecanismos eficientes de consulta y participación

* Véase ese documento en Concamin, *La Confederación de Cámaras Industriales. Integración, organización, funciones, objetivos*. México, Concamin, 1976, p. 33-39.

** Véase ese documento en Carlos Arriola, *Los empresarios y el Estado*, SEP 80, núm. 3, México, 1981, en donde aparece reproducido con el título *Declaración de Principios*. (Cursivas nuestras.)

en (los) que estén representados todos los sectores para lograr una armónica y eficaz coordinación de la actividad planificadora. La actividad encargada de la planificación no deberá pervertir su finalidad convirtiéndose en un instrumento de presión política y económica.” *

Desbrozando el párrafo salen a luz los siguientes puntos en la nueva redacción: *i*) el desarrollo económico compete a los sectores privado y público; *ii*) se reconoce la legitimidad de la planeación; *iii*) ésta será obligatoria para el sector público y optativa para los empresarios; *iv*) se consultarán y participarán en ella “todos los sectores”, y *v*) no se “pervertirá” politizándose.

Tomando los antecedentes de este párrafo del *Ideario* y las vicisitudes de su historia, nos parece que su contenido debe interpretarse en el sentido de un sistema de planeación corporativista y privatista de orientación básicamente bipartita, ello pese a que el documento habla un tanto demagógicamente de participación y consultas a “todos los sectores”.

Con la reforma administrativa de López Portillo se sientan las bases para la institucionalización de un modo diferente de elaboración de las políticas públicas, que privilegia el mecanismo de la planeación y que se plasmó en la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto. La estrategia corporativista en ese período se instrumentó a través de la Alianza para la Producción. Aunque ésta tenía una estructura formal de carácter tripartita, de hecho funcionó más bien con una tendencia bipartita empresarios-gobierno.

Como se dijo antes, en el gobierno de Miguel de la Madrid se estableció un ambiguo sistema corporativista de participación en la planeación, que permite al gobierno un amplio margen de maniobra pues en unos casos podrá instrumentar las llamadas “consultas populares”, convocando a participar en la planeación a toda la población en general y en otros, admitir solamente la representación de uno o los dos sectores constitucionalmente reconocidos (privado y social), manteniendo la reserva de delegar en el presidente las decisiones últimas.

Con relación a este marco institucional que redefine la perspectiva de la relación empresarios-gobierno, se genera un discurso empresarial y un debate político ideológico por la definición del sentido de este nuevo modo de formación de las políticas públicas.

La decisión unilateral de la nacionalización bancaria vino a revivir, con nuevos bríos, el conflicto entre el gobierno y los empresarios por la violación de la práctica institucionalizada de las consultas, que había sido por décadas la modalidad de la relación entre gobierno y empresarios. Se ha abierto de esta manera un debate y una lucha por definir los términos de la presencia empresarial en el ámbito del aparato administrativo

* Consejo Coordinador Empresarial, *Ideario*, Centro de Estudios Sociales del CCF, Doc. núm. 010, México, s.f.

estatal. Considerando que hay distintas posiciones empresariales al respecto destacan las siguientes características del discurso empresarial: primero, una restricción sustancial del concepto de rectoría del Estado, y segundo, un intento de erradicar la participación obrera en las decisiones, mediante una oposición al corporativismo tripartita que apunta a la consolidación de un bipartismo.

En los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid encontramos una demanda empresarial generalizada por la “definición de las reglas del juego” como condición para llegar a un restablecimiento pleno de “la confianza empresarial”. Esta demanda se constituye como oposición a las medidas populistas de política económica —en particular el control de precios— pero también como oposición al presidencialismo y la discrecionalidad gubernamental y apropiándose del discurso de la democracia, pugna por la privatización de las decisiones públicas.

Considerando que se reconoce ya el principio constitucional de la rectoría del Estado, podemos distinguir expresiones más específicas —aunque no del todo consistentes— de la demanda de definición de las reglas del juego:

Coparmex, organización que expresa a la fracción más radical, establece que: “La rectoría del Estado, sin sus fundamentos propios, que son la libertad, el derecho y la subsidiariedad, dejaría de ser verdadera rectoría para dar paso al totalitarismo.” (*Declaración de Principios*, Coparmex, 12 de noviembre de 1982, p. 22.) El sentido de esta definición se advierte con mayor claridad en lo estipulado sobre política económica: “Corresponde en primer lugar a la iniciativa de los particulares establecer las políticas económicas, conforme a derecho en áreas de su competencia. Al Estado compete armonizarlas y fijar las que sean necesarias.” (*Idem*, p. 21.)

Por otra parte, en los documentos empresariales se ha incluido en el concepto de “sector privado” a los “artesanos, profesionistas, empleados y obreros”; de esta manera se ha intentado convocar a amplios sectores para la defensa de la empresa privada y su reconocimiento en la participación de las decisiones, pero también, esta defensa y esta convocatoria se han dirigido en contra de la forma de organización del régimen político, que se expresa como una oposición al corporativismo tripartita,* que im-

* “Cuando se gobierna para sectores y se compartimenta la sociedad, imaginándosela como acomodada en una serie de cajones impermeables entre sí y amontonados uno encima de otro, se olvida que no existe sociedad sin hombres y que el hombre, materia y espíritu, intelecto, razón y emoción, no es clasificable en cajones ni compartimientos, sino que por su naturaleza axiológica, que lo lleva a un permanente ascenso hacia su perfección —como el corcho en el agua— rompe barreras, transgrede líneas imaginarias y desbarata los moldes y estereotipos que desde arriba se le pretende imponer... Son éstas las consideraciones que están en el fondo de la actual crisis, que además de económica, es de naturaleza política, y de liderazgo social.” (J. L. Coindreau, en el foro de la asamblea de la Coparmex del 8 de marzo de 1984.)

plícitamente reconoce estar “basado en la lucha de clases” y que pudiera traducirse en una predecible relación sector público + sector social *versus* sector privado.

De aquí la fuerte reacción empresarial en contra de la distinción y el reconocimiento constitucional de un “sector social”. Sin embargo mientras el discurso empresarial, bajo un argumento democrático liberal —de base individual y no corporativa—, intenta erradicar la existencia del sector social en el sistema de participación, manifiesta una constante preocupación por revitalizar las organizaciones empresariales. El sentido privatista de este ambiguo discurso se pone de manifiesto en la siguiente observación del líder de la Coparmex, respecto a la elaboración de la política económica: el sector empresarial tiene “capacidad de análisis mayor y más amplia información”. (*Excelsior*, 15 de febrero de 1984.)

En este contexto, la Concanaco —exponente también de la fracción más dura de la burguesía— habla de una oposición entre la “rectoría del gobierno”, que la considera como una “rectoría absolutista”, y la “rectoría del Estado”, la que asume una concepción ampliada del Estado, que incluye prioritariamente el punto de vista empresarial. (Véase especialmente *Decisión*, año 5, núm. 52, junio de 1983, p. 11 y 12.) Esta organización considera los foros de consulta popular como parte de la demagogia y la retórica tradicional del gobierno y pugna, sin precisar alcances ni consecuencias, por legitimar el carácter político de las organizaciones empresariales.

Por otra parte, la Concamin —exponente de la fracción negociadora— habla de una oposición entre la planeación gubernamental y la planeación democrática, expresa un reconocimiento pleno de los foros de consulta popular, y distinguiendo entre lo político (social) y la política (como lucha por el poder), reserva para este último tipo de acción empresarial los partidos (discurso presentado por el presidente de la Concamin el 2 de febrero de 1983 en los trabajos de los Foros de Consulta Popular para la Integración del Plan Nacional de Desarrollo, *Concamin*, núm. 750, marzo de 1983, p. 4).

En el discurso del dirigente de la Concamin en el primer foro de consulta popular, este sentido privatista de las decisiones públicas se expresaría no sólo retomando las iniciativas gubernamentales, antes vistas con desconfianza por la cúpula empresarial, sino también rebasándolas: “Una planeación puramente indicativa para los sectores privado y social corre el peligro de perder la concreción del compromiso, en tanto puede no estar considerando en su diseño, los elementos condicionantes del funcionamiento de las unidades productivas. Una planeación democrática, que considere seriamente y a profundidad la realidad de la empresa en sus múltiples dimensiones y por ello obtenga el compromiso concertado, no puede ser más que exitosa”. (*Concamin*, núm. 750, marzo de 1983, p. 4.)

Por otra parte, la lucha empresarial por la instauración de una estruc-

tura de decisiones bipartita reconoce y aplaude los actos de solidaridad tripartita, mientras éstos impliquen una disciplina del sector obrero y mientras no se toque la estructura de participación (véanse en este sentido las declaraciones en torno al Pacto de Solidaridad Tripartita y en especial la de Coparmex del 15 de enero de 1984).

Esta estructura bipartita empezó pronto a institucionalizarse, así por ejemplo en septiembre de 1983 el presidente de la Canacintra anunciaría que en las diversas áreas industriales los sectores público y privado integrarán consejos de planeación industrial, con el fin de lograr mayores entendimientos *bilaterales*, que a una y otra partes les permitan balanceadamente apoyarse en lo económico y tecnológico; entre las principales funciones de estos consejos “estará el evitar que las paraestatales signifiquen una competencia desleal para la industria privada”. (*El Universal*, 17 de septiembre de 1983.)

Más adelante, el 31 de julio de 1984, apareció en el *Diario Oficial* el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 (Pronafice). Este decreto muestra un avance del corporativismo privatista que han demandado los empresarios, pues instituye una Comisión Consultiva de Planeación Industrial que estará integrada según el artículo once, por dos representantes del sector público (los titulares de Secofin y Semip), dos representantes empresariales (los presidentes de Concamin y Canacintra) y *sólo un* representante del sector obrero (el que designe el Congreso del Trabajo).

2. *La vía política*

Con la “vuelta de la confianza” que se produjo durante el régimen del presidente López Portillo, el alto grado de politización que los empresarios habían alcanzado en 1976 inició un fuerte reflujo. En ese marco la reforma política, iniciada por ese gobierno, fue en general vista con desconfianza por la cúpula empresarial, que la consideraba como una reforma “con clara dedicatoria al Partido Comunista”.

Unos años más tarde la reforma política adquiriría nuevas dimensiones cuando, a raíz de la nacionalización de la banca, el embate de los empresarios se expresó también en el marco de la política de partidos, en busca de garantías específicamente políticas para su demanda de participación en la elaboración de las decisiones públicas.

A diferencia del terreno administrativo en el que no se manifiestan casi distintas posiciones de la cúpula empresarial, en el terreno partidista se observan diferentes posiciones de los líderes, las organizaciones y las fracciones. Esto es así porque a partir de la nacionalización bancaria se produjo un amplio consenso empresarial en el sentido de que “la política económica ya no era suficiente para restablecer nuevamente la confianza

perdida", y que era preciso participar activamente en política para refrenar el presidencialismo y el autoritarismo del régimen político mexicano.

Sin embargo, desde un principio se observó una diferencia de enfoque en cuanto a la forma concreta en que se desarrollará esa intervención política empresarial.

Por una parte y en un principio, Concamín hace un llamado a sus agremiados para que como ciudadanos "en pleno uso de sus derechos políticos" canalicen su acción en la lucha por el poder a través de los partidos, aunque también intenta legitimar un cierto carácter político de las organizaciones. Por otra parte, Concanaco, y en particular la Coparmex y el CCE, se van introduciendo cada vez con mayor fuerza y agresividad en el debate político y sus dirigentes van fortaleciendo viejos nexos con el partido tradicional de la derecha, el PAN.

En los intentos por legitimar el carácter político de la participación empresarial, destaca el sofisticado discurso de Concamín basado en una distinción entre lo político (social) y la política (lucha por el poder), reservando este último tipo de acción a los partidos. Una versión menos compleja de esta misma distinción se encuentra en la *Declaración de Principios* de la Coparmex, en el siguiente texto: "Las diversas organizaciones empresariales, además de sus finalidades al servicio de los particulares asociados, tienen la responsabilidad de contribuir, según su modalidad, en la promoción del bien común. Por tanto, su quehacer tiene dos dimensiones: el bien de las empresas o personas asociadas y la participación en el bien común de la sociedad. Esta participación está directamente relacionada con los ámbitos económico y social, que a su vez por sí mismos, tienen relación con lo político" (p. 23).

Coparmex, Concanaco y el CCE, oponiéndose al presidencialismo y al monopartidismo y haciendo suyo el discurso de la renovación moral, se pronunciarán por convertir la racionalidad técnica en una racionalidad electoral, en la práctica bipartidista. En este sentido, hay empresarios que se han sentido identificados con algunos intelectuales destacados al grado de postular como principio un planteamiento de Enrique Krauze sobre la democracia: "Coparmex —expresa su dirigente— ha afirmado que considera la política como gobierno, como poder público y partidos políticos, y que no hará ni hace política. Pero en el sentido amplio del vocablo, como política ciudadana y política de la sociedad, sí hacemos política al servicio del bien común, y postulamos para conseguirlo *la democracia sin adjetivos*, la economía social de mercado y la vertebración libre de la sociedad" (cursivas nuestras, *Excelsior*, 23 de marzo de 1984).

Contrastando con el relajamiento de la presencia empresarial en el PAN, durante el régimen de López Portillo, y aun a pesar de los acuerdos alcanzados en materia de política económica bajo el realismo económico, destaca ya, desde diciembre de 1982, la reactivación empresarial en el frente partidista, que se manifestó ya en los debates en la Cámara de Diputados,

sobre las orientaciones básicas del nuevo gobierno. El partido de la derecha se pronunció entonces en contra de la nacionalización bancaria y la recortaría del Estado y la reforma, que eliminaba el anonimato en la tenencia de las acciones y otros títulos al portador.

A lo largo del año 1983 se contempla una evidente articulación de dirigentes empresariales —en general vinculados a la fracción más dura— con el PAN, un sector de la jerarquía eclesiástica y la embajada de Estados Unidos, que se concentrará en un esfuerzo común por ganar las elecciones regionales en diversas entidades, sobre todo en el norte del país.

La articulación de estos actores se puso de manifiesto por primera vez en forma muy clara en Sonora, cuando se hizo pública a la reunión de dirigentes del PAN con funcionarios de la embajada, el obispo Carlos Quintero Arce y el empresariado local.

Más tarde, hacia mediados del mismo año, la presencia empresarial fue muy destacada en las elecciones municipales de los estados de Chihuahua (donde el PAN ganó las presidencias municipales en que habita el 70 por ciento de la población de esa entidad, con las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez incluidas), Durango, Baja California, Sinaloa y Puebla.

Los propios diputados panistas, a pesar de sus reiteradas quejas por no contar con recursos económicos suficientes, reconocieron que se estaba “trabajando intensamente para obtener apoyo de los hombres de la iniciativa privada”. (*El Nacional*, 30 de julio de 1983.) Por otra parte, es de hacer notar la participación directa de empresarios como candidatos panistas; entre ellos Francisco Barrios, de Chihuahua, Adalberto Rosas y Carlos Amaya, de Sonora, Eugenio Elorduy, de Mexicali y Francisco Canales Clariond, de Nuevo León. Algunos de estos candidatos han ocupado importantes cargos en las organizaciones empresariales: Barrios fue presidente del Centro Patronal del Norte; Amaya (que ya había sido diputado panista anteriormente) fue vicepresidente de Coparmex, y Canales Clariond presidió la Cámara de Comercio de Monterrey y fue vicepresidente de Concanaco. Además, otros dirigentes máximos de esas mismas organizaciones hicieron declaraciones públicas en el sentido de que se lanzarán, en un futuro próximo, como candidatos por el PAN a puestos de elección popular; son los casos de José Luis Coindreau, ex presidente de Coparmex; Manuel J. Clouthier, ex presidente de la Coparmex y el cce, y Emilio Goicoechea, ex presidente de la Concanaco.

Son reveladoras de la nueva voluntad política empresarial las declaraciones del industrial Ricardo Villa Escalera, ex presidente de la cámara textil regional y candidato panista a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, cuando afirmó que los miembros del sector privado deben “participar en política en defensa de sus intereses ante el desmadre (*sic*) político y económico generado por el gobierno; ya que los empresarios no podemos quedarnos cruzados de brazos observando cómo quiebran nuestros negocios al considerar la administración pública como una extensión

de la administración privada. . . los tiempos de negociación con el gobierno en los *lobbys* de los hoteles se han acabado y no han dejado opciones para negociar la posición del sector privado, por lo cual éste debe participar políticamente por medio de los partidos". (*Unomásuno*, 16 de noviembre de 1983.)

Esta reciente participación empresarial en las elecciones contribuye a explicar el apoyo generalizado y decidido de los empresarios a la reforma municipal, quienes paralelamente a los foros de consulta popular sobre el tema organizaron seminarios empresariales en torno a este tópico. (Véase por ejemplo *Decisión*, revista de la Concanaco, año v, núm. 58, diciembre de 1983.)

Las ligas de sectores empresariales con el partido de oposición de la derecha se entrecruzan y promueven con la reactivación de la participación política de la Iglesia que, apoyándose en los empresarios, reclama una serie de modificaciones constitucionales que reconozcan a la institución religiosa un conjunto de derechos largamente reclamados. Ello con vistas al fortalecimiento general de su presencia en la sociedad mexicana.

Un momento de transparente y crucial identificación entre la Iglesia, los empresarios y el PAN se produjo cuando aquélla se sumó a la reprobación de la nacionalización bancaria de septiembre de 1982.

A las acusaciones de la participación de la Iglesia en las elecciones del norte del país, el secretario del Episcopado mexicano solamente respondió que no hubo participación directa, ya que —según lo dicho por el arzobispo— sólo se les pidió a los fieles que votaran para que no hubiera abstencionismo; "los engaños (y) las dudas crónicas, han gestado que los mexicanos hicieran que la balanza se inclinara hacia el PAN". (*Excelsior*, 22 de julio de 1983.)

En defensa de una actuación "por el bien común", la Iglesia jerárquica ha venido apoyando cada vez más las tesis de la derecha, promovidas en buena medida por el sector empresarial. (Véase Roger Bartra, "Viaje al centro de la derecha", en *Nexos*, núm. 64.) El ámbito de su oposición se ha ampliado y ha venido apuntando a la desacreditación no sólo de la izquierda, como siempre lo hizo, pues ahora también abarca en parte al PRI y al autoritarismo del gobierno. Así, por ejemplo, en declarado apoyo al PAN, aunque advirtiendo que no hay que confundir entre partidos e Iglesia, las autoridades eclesíásticas de Puebla emitieron mensajes por la radio haciendo un llamado a la población para "no votar por ideologías materialistas", entre las cuales se incluía la del PRI. (*Unomásuno*, 27 de noviembre de 1983.)

La reactivación de las ligas empresariales con el PAN alcanzó otro máximo cuando en los primeros meses de 1984 —después de un proceso de confrontación de diversas líneas en el interior del partido—, ganó la dirección nacional del partido, Pablo Emilio Madero, quien ha mantenido una extrema y clara vinculación con la fracción norteña de la burguesía.

Este panorama de la ofensiva política empresarial, por la vía del PAN, sería unilateral e incompleto si no se considera también la acción política que los empresarios han desplegado a través del PRI.

Con motivo de la XII Asamblea Nacional del PRI, celebrada del 23 al 26 de agosto de 1984, se hizo transparente la acción política de la fracción conciliadora, al tratar de consolidar, por primera vez, un cuarto sector afiliado al partido oficial: el sector empresarial.

Si bien el PRI siempre ha admitido en su seno a empresarios individuales —a los que a veces se les exige se declaren “nacionalistas”— e inclusive la CNOP afilia a diversas organizaciones representativas de empresarios y propietarios (la CNPP, la Alianza de Camioneros de México, la Confederación Nacional de Autotransportistas y algunos otros organismos de pequeños comerciantes e industriales), lo nuevo ahora es que se habla de un cuarto sector del PRI, que daría a los empresarios una presencia organizada corporativamente, permanente y pública dentro del partido y del régimen político mexicano.

En este sentido se pronunció la Canacindra cuando por boca de sus dirigentes manifestó que sería adecuado el mencionado sector empresarial del PRI, ya que “propiciaría una competencia que redundaría en una superación del ejercicio gubernamental”. (*Unomásuno*, 3 de julio de 1984 y *El Universal*, 5 de julio de 1984.)

Al respecto, la Concamin externó su posición que también aprobaba —aunque de manera no tan abierta— el ingreso al PRI. (*Excelsior*, 26 de agosto de 1984.)

Sin embargo, el asunto no fue ni siquiera discutido en el seno de la asamblea priísta, debido ante todo a la oposición de la burocracia sindical. De ese modo la participación empresarial en el PRI permaneció en los mismos términos de siempre, es decir, fundamentalmente a título individual.

En resumen, los empresarios aparecen ahora como un nuevo sujeto dotado de una voluntad en busca de garantías políticas. Esta nueva voluntad política es común a ambas fracciones empresariales que actúan por la vía de los partidos, a través del PAN, muy claramente los duros, y del PRI, de manera velada, los conciliadores.

Por último anotaremos que el fortalecimiento del PAN parece contar con algunas simpatías de sectores minoritarios dentro del gobierno, especialmente en la tecnocracia, pues juzgan que el reconocer algunos triunfos electorales a ese partido, redundaría en una mayor legitimidad para el gobierno, su partido y sus políticas.

3. *La vía cívica*

La crítica empresarial ha hecho su oposición “democrática” extensiva al campo de lo social, promoviendo de manera consciente su presencia

mediante el fortalecimiento de lo que ha denominado la acción cívica. Para enfrentarse al "absolutismo del poder", los empresarios han intentado consolidar organizaciones múltiples y del más diverso carácter, con la mira de retener su experiencia como movimiento de derecha, institucionalizando el momento político de la tensión en el conflicto. Este aspecto de la voluntad política empresarial se origina en su oposición al intervencionismo estatal pero lo rebasa, rebasando también el conflicto en el terreno económico administrativo y en el terreno partidista, y apunta a consolidar una participación pública y legitimada que complemente su acción en esos campos.

La acción cívica se apoya en un discurso empresarial que opone la ciudadanía al gobierno, los gobernados a los gobernantes, lo privado a lo público y la "iniciativa privada" al gobierno y al Estado, pretendiendo que se entienda a esta iniciativa privada, como la acción de todos aquellos ciudadanos (los obreros y los campesinos incluidos), "que no cobran un salario del gobierno". El discurso llama a todos los ciudadanos gobernados que componen esta iniciativa privada, para que se organicen en agrupaciones cívicas de toda índole, con objeto de poner un freno al expansionismo del gobierno y el Estado y para detener el autoritarismo y el presidencialismo mexicanos.

Este nuevo discurso cívico tiene expresiones distintas: mientras que la fracción negociadora lo dirige sobre todo a la legitimación de un cierto quehacer político de las organizaciones empresariales, la fracción más dura lo hace extensivo a todo tipo de organizaciones.

Así, en el primer caso, el presidente de la Concamin, refiriéndose a la demanda social de "encontrar mecanismos institucionalizados para una participación política, económica y social que reciba el respeto y el apoyo de las autoridades constituidas por representación y mandato", expresaría: "Sabio el Gobierno que percibiendo la demanda social, plantea mecanismos de participación organizada y efectiva [refiriéndose a los foros de consulta popular]... en la complejidad de la sociedad contemporánea, las organizaciones de los diversos sectores sociales, tienden naturalmente a actuar a la defensa de sus intereses particulares pero legítimos y por lo tanto afectan la esfera de lo político de la sociedad, sin por ello comprometerse en la vida política, en la lucha por el poder." (Alfonso Pandal Graf, presidente de la Concamin, en los trabajos de los Foros de Consulta Popular para la Integración del Plan Nacional de Desarrollo, 2 de febrero de 1983, *Concamin*, núm. 750, marzo de 1983.) Destaca aquí, la manera en que el planteamiento empresarial recoge y asume el discurso gubernamental para imprimir un sentido político a las organizaciones empresariales.

Otro tono muy distinto tiene las expresiones de la fracción empresarial más dura; particularmente el CCE y la Coparmex han dirigido sus esfuerzos por consolidarse, en el ámbito social, a amplios sectores de la población, en especial las clases medias, para que mediante la institucionalización

—ya no estatal sino social— de organizaciones intermedias puedan presentar “un frente al estatismo”. Han promovido así una acción ciudadana que desborda tanto el marco de la política de partidos como a las propias organizaciones empresariales e, incluso, han llegado a plantear una demanda límite: dejar la toma de decisiones en manos de la ciudadanía. Este concepto tiende a privilegiar al sector empresarial en tanto que considera que él mismo “tiene capacidad mayor de análisis y más amplia información”.

Un ejemplo elocuente de este aspecto de la nueva voluntad política empresarial, se puso de manifiesto en la XLIV Asamblea Nacional Ordinaria de Coparmex, celebrada en marzo de 1984 en la ciudad de México. En un extenso ataque al intervencionismo estatal, al presidencialismo, al monopatidismo y en particular a la vía corporativa tripartita, los distintos ponentes se pronunciaron por la revitalización de las organizaciones empresariales, el fortalecimiento de la vía electoral y lo que se llamó “la vertebración de la sociedad en la libertad” o “la ampliación de la participación ciudadana cotidiana”, planteamiento este último, que se encontraba ya esbozado de manera incipiente en el primer *Ideario* del CCE.

En el foro de la Coparmex, su ex presidente, J. L. Coindreau propondría ampliar el ámbito de la acción y participación individual en el quehacer de la sociedad y hacer un esfuerzo consciente por expandir la sociedad frente al gobierno mediante la multiplicación de organismos intermedios que “vertebren a la sociedad” y articularlos con “los partidos” para fortalecer la actividad ciudadana. Este mismo ponente afirmaría: “necesitamos forzar la difusión de nuestros puntos de vista en todos los medios y todos los círculos a los que cada uno de nosotros tiene acceso”. El vicepresidente de la Coparmex haría, en este sentido, una explícita convocatoria a impulsar esta acción cívica, mediante una serie de propuestas encaminadas a fortalecer la vida orgánica de las organizaciones empresariales —“promoviendo una actitud de mayor apertura, equilibrio y madurez frente a las autoridades civil y religiosa”—, pero también encaminadas a reforzar la presencia empresarial en las universidades y demás institutos técnicos y de enseñanza superior.

Por otra parte, otro frente de esta acción cívica empresarial se desarrolla en sus ligas con la Iglesia. Unidos por su exclusión formal en el régimen político mexicano, sectores importantes de la jerarquía eclesial y de los empresarios han expresado su unidad no sólo en el marco de acción del partido de derecha, sino también a través de apoyos mutuos respecto a las políticas del gobierno, al que se define como “enemigo del pueblo católico” (véanse en este sentido las declaraciones de Alejandro Gurza, miembro del comité ejecutivo de la Coparmex, *El Herald*, 9 de septiembre de 1983), reforzando de esta manera su interpelación a amplios sectores de la población.

La Iglesia ha apoyado a los empresarios no sólo porque tiene con ellos

afinidades político-ideológicas de fondo, sino también porque los considera sus aliados naturales para el logro próximo de sus propios fines: fortalecer su presencia en la sociedad mexicana haciendo, para empezar, que se le satisfaga un conjunto de viejas demandas, que implican serias rectificaciones a la Constitución y que ahora reclama con nuevos bríos. Son ellas: el reconocimiento constitucional de su personalidad jurídica, de la ciudadanía y de los derechos políticos para los ministros de los cultos; el establecimiento de relaciones diplomáticas de México con El Vaticano, y la legalización de la escuela confesional.

Con vistas al fortalecimiento de su presencia, además de reclamar los derechos mencionados, la Iglesia se ha opuesto a la legalización del aborto voluntario alentando a grupos como el llamado ProVida, ha planteado la canonización de nuevos santos mexicanos (en sus listas figuran no menos de 15 candidatos, varios de ellos "mártires cristeros") entre ellos Juan Diego, con cuya exaltación pretende revitalizar al poderoso símbolo guadalupano que ella administra, y promueve una segunda visita del Papa que mediante las previsibles movilizaciones populares que suscite, ponga de manifiesto su fuerza política.

La alianza de los empresarios con la Iglesia se manifiesta de manera particular en los discursos de los ideólogos de la Concanaco (véase la sección "Filosofía empresarial" en la revista de este organismo, *Decisión*) y en menor grado en los discursos de los dirigentes de Coparmex. Destaca, por otra parte, la ausencia de este vínculo político religioso en los pronunciamientos de Concamin.

Ligados también por su oposición a la educación estatal, sectores de la Iglesia y de los empresarios se han pronunciado abiertamente en contra del gobierno. Un ejecutivo de la Coparmex expresaría, respecto a la reforma educativa lanzada por el gobierno, que "si se sigue en esto mismo el esquema que se está aplicando a la economía (en referencia a la economía mixta), será la confirmación de la educación totalitaria". En este ámbito, parece haber un intento de oposición que tiene como vía organizativa las sociedades de padres de familia, que como se recordará, en el período de Echeverría tuvieron un fuerte impacto social y político en el conflicto por los nuevos libros de texto. El empresario y dirigente arriba mencionado continúa en este sentido: "...una verdadera reforma educativa deberá ser respetuosa y restauradora de los derechos de los padres de familia". (*El Herald*o, 9 de septiembre de 1983).

El llamado empresarial a reforzar su presencia en las universidades y centros de enseñanza en general, contenido ya en los documentos iniciales del CCE, ha sido reiterado en declaraciones posteriores y ha perdido un tanto su carácter defensivo, convirtiéndose, prácticamente, en una ofensiva ideológica. Destaca dentro del programa "empresa-escuela" en el que participa el gobierno y la empresa privada, un informe del convenio entre Coparmex y el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) que

incluye entre sus logros la realización de “seminarios de formación ideológica” (Informe de Francisco González Garza, de EDHUCA); en este marco Basagoiti, presidente de Coparmex, afirmaría que la empresa “debe contribuir al progreso y desarrollo; a la promoción del bien común y al fortalecimiento del orden social”.

La difusión de las tesis empresariales, que ya rebasan en mucho las opiniones sobre la política económica, se ha intentado fortalecer también en los círculos académicos. Sólo como ejemplo citemos la amplia propaganda que se hace en los muros de la UNAM a las conferencias que, sobre “filosofía marxista”, ha organizado Luis Pazos (uno de los ideólogos empresariales más “populares”) en el Instituto de Integración Iberoamericana, que él mismo dirige.

Este tipo de eventos ha venido a reforzar y complementar la ofensiva empresarial dirigida a sectores más amplios a través de una nueva “literatura política”, que ha tenido una gran acogida particularmente en los sectores medios, y a través de otros canales de difusión, en especial la televisión, dirigidos a formar la “opinión pública”. De hecho en los últimos años se ha desarrollado un “bestsellerismo” de derecha que coincide en un discurso político unilateral, que reduce las explicaciones del funcionamiento del régimen político y de las causas de la crisis a un problema exclusivamente de personas y de voluntades de individuos, y que denuncia rabiosamente la corrupción oficial, la omnipotencia del presidente y un supuesto estatismo socializante. Entre las obras más vendidas que se alinean a este punto de vista, que abierta o implícitamente hace la apología de los empresarios, figuran: las novelas de Luis Spota que componen la saga *La costumbre del poder*, los libros de Luis Pazos, las confesiones de algunos ex gobernadores y el libelo que denuncia la corrupción del ex jefe de la policía capitalina, hecho por su guardaespaldas, que por su parte confiesa haber asesinado a varias decenas de personas en los últimos lustros. (Respecto a esta literatura véase Sara Sefchovich, “La derecha apocalíptica”, en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. XLV, núm. 2, abril-junio de 1983.)

En cuanto a la televisión, es notoria en los últimos tiempos la ampliación de espacios y tiempos otorgados por Televisa a los programas de noticias y comentarios destinados a la formación de opinión pública, en los que se difunden de manera más o menos abierta las tesis empresariales y de la derecha en general. Destacan en ese sentido la conversión del canal 8 en cultural, el programa “Hoy mismo”, las series “Contrapunto” y “60 minutos” y la ampliación de horarios del noticiero “24 horas”, entre otros.

Por otra parte, ha sido también notable en los últimos tiempos la política empresarial encaminada a participar de manera más amplia en la organización y difusión de la cultura, mediante la creación de fundaciones culturales, la promoción de eventos en la televisión y otras instituciones como el Museo Tamayo y el intento de seducir y captar intelectuales des-

tacados, ejemplo claro de lo cual fue el grandioso homenaje rendido por Televisa a Octavio Paz, en 1984.

En otro orden de cosas, es también digna de mencionarse la proliferación de grupúsculos fascistas, que tienen un claro apoyo de sectores empresariales, sobre todo en Guadalajara. (Véase Manuel Buendía, *La ultraderecha en México*, Editorial Océano, México, 1984.)

La convocatoria empresarial a la acción cívica trata en síntesis de fortalecer la presencia de ese sector en la sociedad civil, como vía para consolidar su participación en las decisiones públicas, haciendo uso de la experiencia de los empresarios como movimiento de derecha y a través de un desarrollo consciente y meditado de múltiples y diversas organizaciones político sociales que agrupen profesionistas, padres de familia, vecinos, amas de casa, estudiantes, etcétera.

Sin embargo, a pesar de los avances en este terreno, la nueva voluntad política empresarial, manifiesta en la cúpula, tiene una debilidad: el escaso poder de convocatoria de los líderes.

Se trata de una fuerza ya efectiva pero difusa que no termina de construir una unidad de clase ni encuentra los mecanismos institucionales que cristalicen esta voluntad. Esta debilidad es en gran medida producto de la naturaleza eminentemente reactiva de la acción empresarial que depende de las iniciativas estatales, y de la cultura política estatista que también comparten muchos empresarios.

De esto son también conscientes los líderes empresariales, quienes en los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid expresaron un malestar constante por la ausencia de preocupaciones políticas de sus bases. Así por ejemplo, el Coordinador del Consejo de Presidentes de Cámaras Industriales de Jalisco —uno de los estados que se ha caracterizado por sus movilizaciones empresariales—, ante la pregunta de por qué después de las reuniones de “México en la libertad” no había mayor presencia de los empresarios, diría que “los empresarios algunas veces anteponen la defensa de sus intereses a la defensa de sus principios”. (*El Heraldo*, 1 de septiembre de 1983.) Las propias organizaciones empresariales, que son vistas por los empresarios como el núcleo articulador de su acción cívica y política, atraviesan por una desestructuración que rebasa la división de las fracciones históricas. En este sentido, la Coparmex expresaría su preocupación por la proliferación de asociaciones empresariales “que han surgido de manera espontánea”, que “son muy independientes y no desean integrarse”. Esto lo atribuye un dirigente, a la escasa representatividad de los organismos cúpula, detectando como síntomas de este fenómeno los siguientes: disgusto entre las empresas afiliadas por considerar que los organismos no cumplen con sus objetivos, desacuerdo respecto a las posiciones de los organismos frente al gobierno y escasa participación de las empresas afiliadas en la vida de las agrupaciones y en particular en la toma de las decisiones (discurso de Saturnino Suárez Fernández, vicepresidente de la Coparmex y

del Grupo Ica, en la asamblea nacional de ese organismo, 9 de marzo de 1984.)

Para concluir podemos decir respecto a la relación entre el gobierno y los empresarios en los inicios del período de Miguel de la Madrid, que todavía se vive una confrontación por definir los términos y el sentido de la alianza que habrá de normar sus relaciones.

En esta confrontación han surgido una nueva voluntad política, una nueva acción y un nuevo discurso empresarial que convergen en una clara dirección: el establecimiento de garantías políticas que aseguren permanente y suficientemente la participación empresarial en la decisión de las políticas públicas.